



Universidad
de Alcalá

EL DELITO DE CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE

THE CRIME OF CORRUPTION IN THE
FIELD OF SPORT

TRABAJO FIN DE MÁSTER

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROFESIÓN
DE ABOGADO

AUTOR:

D. ANTONIO GARCÍA GUTIÉRREZ

TUTOR:

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. D. DIEGO-MANUEL LUZÓN PEÑA

TUTORA:

Prof. Dra. D^a. CARMEN PÉREZ-SAUQUILLO MUÑOZ

Alcalá de Henares, a 24 de febrero de 2020.

ÍNDICE

RESUMEN	4
ABREVIATURAS	5
I. INTRODUCCIÓN.....	6
II. CONCEPTO DE CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE Y RÉGIMEN JURÍDICO.	8
A. Concepto.....	8
B. Régimen jurídico.	8
III. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE LA CORRUPCIÓN DEPORTIVA.	11
A. El <i>fair play</i> o juego limpio.	13
B. Protección de la dimensión económica del deporte.	14
C. La “integridad deportiva”.....	15
D. Corrientes eclécticas.....	15
IV. ELEMENTOS DEL TIPO.	17
A. CORRUPCIÓN ACTIVA Y CORRUPCIÓN PASIVA.....	17
B. EL TIPO OBJETIVO.....	19
1. LOS SUJETOS.....	19
a) Sujetos activos en la corrupción activa.	19
b) Sujetos activos en la corrupción pasiva.....	21
c) Sujetos pasivos en la corrupción deportiva.	27
d) Las entidades deportivas.	28
2. CONDUCTA TÍPICA.....	30
a) La especial relevancia económica o deportiva de la competición.	30
b) La conducta típica en los amañados de los encuentros y eventos deportivos en el delito de la corrupción en el deporte.....	32
c) Las primas en el deporte como posible conducta típica.....	37
C. EL TIPO SUBJETIVO.....	41

V. LA ANTIJURICIDAD, LA CULPABILIDAD Y LA PENALIDAD Y PERSEGUIBILIDAD EN LA CORRUPCIÓN DEPORTIVA.....	43
A. LA ANTIJURICIDAD.....	43
B. LA CULPABILIDAD.....	45
C. LA PENALIDAD Y LA PERSEGUIBILIDAD.....	46
1. Penalidad.....	46
2. Perseguibilidad.....	48
VI. <i>ITER CRIMINIS</i>. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN. POSIBLES RELACIONES CONCURSALES.	49
A. <i>ITER CRIMINIS</i>	49
B. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN.	51
1. La persona interpuesta.....	52
2. Los terceros favorecidos.....	53
C. CONCURSOS DE DELITOS.....	53
1. El delito de dopaje en relación con la corrupción con el deporte.	54
2. Otros posibles concursos de delitos	55
VII. CONCLUSIONES.....	57
VIII. BIBLIOGRAFÍA.....	60
IX. LEGISLACIÓN.....	62

RESUMEN

El presente trabajo pretende llevar a cabo un estudio del nuevo delito de corrupción en el ámbito del deporte, teniendo en cuenta el aumento de la relevancia social que se ha experimentado en este aspecto durante los últimos años. Para ello se analizará el artículo 286 bis. 4 del Código Penal, en virtud del cual se condenan estos hechos. Este texto se centrará en el estudio de sus elementos típicos y de otros aspectos relevantes del tipo, así como se analizará la determinación de su bien jurídico protegido. También se observará su posible aplicación y los posibles concursos de delitos en la corrupción deportiva.

PALABRAS CLAVE

Corrupción. Corrupción deportiva. Competiciones deportivas. Derecho penal. Alteración o predeterminación de resultados. Mercado deportivo. Dádiva.

ABSTRACT

This work aims to conduct a study of the new crime of corruption in the field of sport. For this, we would analyze article 286 bis.4 of the Penal code, under which these facts are punished. This text will focus on the study of its typical elements and other relevant aspects of the type, as well as analysis on the determination of their protected legal good. Its possible application will also be observed and possible criminal contests in sports corruption.

KEY WORDS

Corruption. Sports corruption. Sports competition. Criminal law. Alteration or predetermination of results. Sports market. Gift.



ABREVIATURAS

CP – Código penal.

DP – Derecho penal.

RADPP – Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal.

RDPC – Revista de Derecho Penal y Criminología.

RECPC – Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología.

RFNE – Foro, Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época.

RP – Revista Penal.

LO – Ley Orgánica.

I. INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo tiene como objeto el estudio del novedoso delito de corrupción en el ámbito del deporte del artículo 286 bis.4, que entró en vigor en España en el año 2010 y que fue modificado por la reforma del Código penal del año 2015. El análisis versará sobre el bien jurídico que se protege con esta norma, los elementos típicos y otros aspectos relevantes de este tipo penal específico.

El deporte español, desde el principio del siglo, ha experimentado un crecimiento sin precedentes, pues en apenas dos décadas se han conseguido títulos mundiales, tanto en deportes colectivos como individuales: éxitos colectivos como el Mundial de fútbol de Sudáfrica en 2010 o el reciente Mundial obtenido por la selección española de Baloncesto, así como los éxitos individuales que han ido cosechando en estos últimos años deportistas como Rafael Nadal, Ona Carbonell, Marc Márquez o Lydia Valentín, entre otros muchos.

La importancia del deporte no sólo queda relegada al mundo del deporte profesional, sino que es de gran importancia para la vida cotidiana. La propia Constitución española establece que el deporte debe ser fomentado por los poderes públicos, en su artículo 43.3¹. Incluso el Tribunal Supremo ha manifestado la importancia de amparar *“una actividad de indudable utilidad pública, y que forma parte del conjunto de elementos que tienden no sólo ya a proporcionar medios materiales a los ciudadanos, sino que mejoran la calidad de su vida cotidiana”* (Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo contencioso-administrativo, de 23 de marzo de 1988).

El deporte, a pesar de sus éxitos y trascendencia en la sociedad, tiene un punto negativo que perjudica su imagen y los valores que representa. Junto al incremento de la relevancia socioeconómica han surgido actividades contrapuestas que buscan conseguir beneficios a costa de alterar los resultados de los encuentros y competiciones deportivas.

Además, junto a estas prácticas más que reprobables, también ha surgido un negocio que, aparte de ser una lacra para la sociedad, incentiva a los sujetos a que realicen conductas encaminadas a la manipulación de los resultados de los eventos deportivos, como son las casas de apuestas.

¹ Artículo 43.3 CE: *“Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”*.

En base a esto, se tipifica el delito de la corrupción en el deporte, que busca dar una protección reforzada contra estas actividades ilícitas. Por ello, en el presente trabajo se estudiará la importancia de la entrada en vigor de este tipo penal, así como se analizarán los aspectos más relevantes del delito de corrupción en el deporte.

En el presente trabajo se centrará en el estudio del tipo del art. 286 bis. 4, y se harán algunas breves referencias a los subtipos agravados y atenuados, sin profundizar en los mismos. Por tanto, este texto se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se estudiará el régimen jurídico del delito y, se realizará un análisis de las diferentes teorías sobre el bien jurídico tutelado en este precepto. En segundo lugar, se analizará los diferentes elementos típicos que componen este delito. Y, para finalizar se realizará un estudio sobre otras cuestiones del tipo y se analizarán las posibles relaciones concursales con este delito.

II. CONCEPTO DE CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE Y RÉGIMEN JURÍDICO.

A. Concepto.

Con carácter general se puede entender que el delito de corrupción es toda aquella actuación de una persona, dotada de poderes de decisión, que actúa en el marco de un sistema normativo de referencia, de forma opuesta a las reglas o normas que rigen su actividad, con la intención de obtener una ganancia ilícita.²

En el ámbito que nos ocupa, el delito de corrupción en el deporte se puede definir como *“toda actuación de una persona dotada de poderes de decisión en el marco de una prueba, encuentro o competición deportiva, tendente a la predeterminación o alteración deliberada y fraudulenta del resultado, en contra de lo prescrito por la reglamentación deportiva, con la expectativa de obtener un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza”*.³

B. Régimen jurídico.

En la legislación española, la corrupción o fraude en el deporte sólo se regulaba en el ámbito del Derecho Administrativo a través de la Ley del deporte de 1990⁴. En el año 2010 se introdujo también su regulación en el ámbito penal, cuando la Ley Orgánica 5/2010⁵ tipificó como delito la corrupción deportiva en nuestro ordenamiento jurídico, mediante la incorporación del artículo 286 bis. 4 del Código Penal⁶.

Este nuevo delito se enmarca dentro de la corrupción en el sector privado o corrupción entre particulares. Es decir, la corrupción deportiva va a estar ligada a determinadas actuaciones donde existen agentes económicos que sobornan o que piden o aceptan sobornos de responsables de contratación privada de bienes o servicios de

² ENCINAR DEL POZO, Delito de corrupción privada, 2016, p. 42.

³ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de Corrupción Deportiva, 2018, p. 38.

⁴ Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

⁵ Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

⁶ Art. 286 bis. 4 CP: *“Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales”*.

carácter profesional con el único objetivo de conseguir una mejor situación comercial o algún tipo de beneficio⁷.

El contenido de este nuevo artículo en su conjunto se deriva de una Decisión Marco del Consejo de la UE⁸ que busca luchar contra la corrupción en el sector privado. Esta tendencia ya había sido regularizada en otros países europeos como Alemania e Italia, pero su introducción en España causó mucha polémica, debido a que la redacción de esta norma causaba muchos problemas interpretativos, sobre todo en el último apartado, relativo al delito de la corrupción en el deporte. Entre estos problemas interpretativos, destacan la inexacta determinación de los sujetos⁹ y el problema de la especificación de lo que era considerado deporte profesional¹⁰.

Ante estos problemas de interpretación, se decide iniciar una nueva reforma de la norma para intentar dar una solución a estos problemas interpretativos, la cual se formalizará con la LO 1/2015¹¹. En esta ley orgánica se sustituyen y cambian varios aspectos de la redacción anterior, de esta manera queda la redacción del texto legal y con actual vigencia de la siguiente forma:

Artículo 286 bis. 4 CP: *“Lo dispuesto en este artículo¹² será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas*

⁷ ANARTE BORRALLA/ROMERO SÁNCHEZ, RECPC, 14-20, 2012, pp. 1-2.

⁸ Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado.

⁹ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de Corrupción Deportiva, 2018, p. 83.

¹⁰ BENÍTEZ ORTÚZAR, Delito de “Fraudes deportivos”, 2011, p. 113.

¹¹ Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

¹² Artículo 286 bis CP: “1. El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

2. Con las mismas penas será castigado quien, por sí o por persona interpuesta, prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales.

3. Los jueces y tribunales, en atención a la cuantía del beneficio o al valor de la ventaja, y a la trascendencia de las funciones del culpable, podrán imponer la pena inferior en grado y reducir la de multa a su prudente arbitrio”.

que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva.

A estos efectos, se considerará competición deportiva de especial relevancia económica, aquella en la que la mayor parte de los participantes en la misma perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad; y competición deportiva de especial relevancia deportiva, la que sea calificada en el calendario deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de que se trate”.¹³

¹³ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Art. 286 bis. 4.

III. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE LA CORRUPCIÓN DEPORTIVA.

La introducción de la corrupción deportiva como nuevo tipo delictivo en el ámbito del Derecho Penal ha generado un gran debate sobre sus elementos típicos. Desde una perspectiva político-criminal, la falta de claridad por parte del legislador en el momento de fijar el objeto de protección hace que la determinación del bien jurídico en el delito de la corrupción deportiva sea uno de los elementos que revierta una mayor complejidad en el momento de interpretar este tipo penal¹⁴, respecto del cual los expertos sobre esta materia no llegan a ponerse de acuerdo, lo que ha generado diversas teorías.

Entre estas teorías hay corrientes que consideran que aquello que se quiere proteger no tiene ningún interés o relevancia penal, como así lo ha venido opinando la doctrina más clasista desde un primer momento, al considerar que el Derecho y el deporte no se deben relacionar, por ser mundos totalmente diferentes. En este sentido se ha expresado MARTÍNEZ-BUJÁN al entender que lo único que se quiere proteger *“es la pureza o limpieza en la obtención del resultado en una competición deportiva, o conceptos semejantes”*¹⁵, lo que a su parecer no es un interés digno de tutela penal, y por ello esta *“conducta no debería rebasar el ámbito del ilícito disciplinario deportivo”*¹⁶. También en esta perspectiva se han enmarcado otros autores, como por ejemplo CARUSO FONTÁN¹⁷, al defender que en una actividad privada como es el deporte no es posible encontrar un bien jurídico tutelable en el ámbito penal más allá del patrimonio, que ya está suficientemente protegido por otros tipos penales y menos aún merece una protección anticipada como la ofrecida por el delito de corrupción deportiva (que ni siquiera requiere como elemento típico un daño patrimonial).

A pesar de que aún hay críticos de este tipo penal desde la perspectiva del bien jurídico protegido, el incremento de la relevancia social y económica que ha tenido el deporte en los últimos años hizo considerar a una parte importante de la doctrina que el ordenamiento jurídico penal debía asumir y especificar las líneas externas que no debe rebasar la práctica deportiva.¹⁸

¹⁴ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, pp. 58-60.

¹⁵ MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Derecho penal económico, 5ª ed., 2015, p. 390.

¹⁶ *Ibid.*, p. 391.

¹⁷ CARUSO FONTÁN, RFNE, 9, 2009, pp. 171-172.

¹⁸ ESER, RP, 6, 2000, p. 53.

En primer lugar, para poder establecer cuál es el bien jurídico en el delito específico de corrupción deportiva se puede partir de una interpretación sistemática que atienda a su ubicación en el CP y al bien jurídico protegido en los delitos de su entorno. Así, este nuevo delito se enmarca dentro del Título XIII sobre los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, incorporado en el Capítulo XI, donde se regulan los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores, y más concretamente, en la sección cuarta relativa a los delitos de corrupción entre particulares o corrupción en los negocios.

El bien jurídico tutelado en los delitos de corrupción en los negocios suele situarse en el marco de la libre competencia, la libre concurrencia o la competencia leal¹⁹, justa y honesta²⁰. En esta línea debe situarse el bien jurídico tutelado en el delito de la corrupción en el deporte del artículo 286 bis. 4 CP, pero con las correspondientes matizaciones de este delito específico, pues hay que tener en cuenta el concreto ámbito social al que afecta esta conducta típica. En consecuencia, la competencia libre y leal en el mercado deportivo en general no puede ser como tal el bien jurídico protegido en este tipo penal específico, sino que habrá que enmarcar esta competencia leal dentro del ámbito del desarrollo de un encuentro, de una prueba o una competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva, atendiendo a los parámetros específicos que permitan legitimar la intervención punitiva²¹. Todo ello hace que las posibilidades de concretar cuál es el bien jurídico tutelado sean varias: de entre todas las tesis, destacan la teoría del juego limpio, la de los intereses económicos derivados de la conducta típica, la del concepto de integridad deportiva y, por último, las corrientes eclécticas. Estas teorías se analizarán a continuación²²:

¹⁹ ENCINAR DEL POZO, Delito de corrupción privada, 2016, pp. 253-277.

²⁰ GILI PASCUAL, Corrupción en sector privado, 2017, pp. 69-78.

²¹ BENÍTEZ ORTÚZAR, Delito de “Fraudes deportivos”, 2011, p. 115.

²² Véase al respecto la exposición de SÁNCHEZ BERNAL, Delito de Corrupción Deportiva, 2018, pp. 64-76.

A. El *fair play* o juego limpio.

La primera tesis considera que el bien jurídico protegido es el “juego limpio” o “*fair play*”, es decir, la leal competencia deportiva en sentido estricto. Según esta teoría, lo que se intenta proteger es la igualdad de armas que debe existir entre los contendientes de toda prueba deportiva, la cual se ve gravemente debilitada cuando ha existido una adulteración fraudulenta de la competición. Por tanto, esta línea tiene su fundamento en la protección del correcto funcionamiento de las competiciones deportivas profesionales, es decir, en el interés en que exista una regularización de las competiciones deportivas y la autenticidad de sus resultados²³.

Esta tesis ha sufrido numerosas críticas. Por un lado, no se considera que este bien tenga entidad suficiente para ser estimado como un bien jurídico tutelable en el ámbito penal, esto es, para legitimar la intervención penal en el ámbito deportivo. Parece suficiente para la correcta tutela de este bien jurídico la normativa disciplinaria-administrativa que regula la actividad deportiva²⁴.

Además, por otro lado, hay que tener en cuenta que el mismo tipo penal limita la intervención punitiva a las competiciones deportivas de carácter profesional, es decir, de especial relevancia económica o deportiva, lo que da a entender que se protegen más aspectos que el simple “juego limpio”. Se deduce así que, si solo se protegiera el “*fair play*” (que también quedaría en peligro o afectado por actuaciones fraudulentas encaminadas a alterar o predeterminar una serie de resultados de un encuentro, prueba o competición deportiva que no tuviera ese carácter de profesional o que no poseyera esa especial relevancia, como pueden ser las categorías inferiores o las ligas amateur o aficionado), la intervención punitiva en estos casos no estaría de ninguna manera justificada²⁵.

En definitiva, al restringir la intervención penal a las competiciones de especial relevancia deportiva o económica, se muestra que el “*fair play*” como tal no tiene la entidad suficiente para ser considerado como un bien jurídico tutelable en nuestro ordenamiento jurídico penal, lo que hace determinar que el bien jurídico que se busca proteger con este nuevo precepto penal es algo diferente o algo más que el juego limpio.

²³ Así se describe en *Ibid.*, pp. 64-65.

²⁴ V. por ejemplo CARUSO FONTÁN, RFNE, 9, 2009, p. 172.

²⁵ BENÍTEZ ORTÚZAR, Delito de “Fraudes deportivos”, 2011, p. 116.

Abunda en este aspecto la idea que las organizaciones deportivas, ya sean de especial relevancia o no, cuentan con la suficiente autonomía organizativa y capacidad disciplinaria para controlar los aspectos de sus competiciones, así como de evitar y sancionar dichas actividades fraudulentas, con el fin de proteger el simple juego limpio.

B. Protección de la dimensión económica del deporte.

Otra de las tesis establece que el bien jurídico protegido gira o debería girar en torno a los intereses económicos derivados de la conducta típica, caracterizándolo de esta forma como un delito patrimonial: es decir, se concebiría este tipo penal como una modalidad específica del delito de estafa. Todo ello con base en que la predeterminación o alteración de los resultados de encuentros o competiciones deportivas pueden afectar patrimonialmente a diversos sujetos, como pueden ser: a los propios deportistas en detrimento de otros competidores; a la propia entidad deportiva que se ha visto favorecida con el resultado obtenido fraudulentamente en el encuentro o competición; a los terceros apostantes, pues el auge que ha tenido el mercado de apuestas deportivas en los últimos años hace que se muevan significativas cantidades en este mercado y que pueden verse afectadas por la alteración de los resultados de los encuentros deportivos; y, por último, también hay que aludir en este sector a los patrocinadores deportivos en el contexto de las retransmisiones deportivas y la rentabilidad publicitaria²⁶.

Esta teoría se enmarca en la simple protección del perjuicio patrimonial que puede devenir de la alteración de los resultados de las pruebas o encuentros deportivos, es decir, sólo se centra en la perspectiva del perjuicio económico multidireccional, sin tener en cuenta las demás circunstancias que han llevado al legislador a tipificar el artículo 286 bis.4 CP. Por tanto, desde una interpretación gramatical e histórica de la norma, la protección de esa perspectiva patrimonial no encajaría por sí misma como el principal bien jurídico tutelable de este tipo delictivo, ya que hace caso omiso de otras consideraciones que se estipulan en el precepto y que también se quieren proteger por el legislador, como la especial relevancia deportiva o social. En definitiva, nos encontramos ante un delito *socioeconómico* y no ante un simple delito económico y por ello, en mi opinión, esta teoría sobre el bien jurídico protegido no sería la correcta, pues con este delito se pretende proteger un bien mayor que el simple perjuicio patrimonial.

²⁶ MORILLAS CUEVA, Fraude en el deporte, 2017, pp. 46-47.

C. La “integridad deportiva”.

Entre estas tesis también nos encontramos con la teoría de la “integridad deportiva” como el bien jurídico protegido en el delito de corrupción deportiva, el cual sería un concepto global y unitario que abarcaría las diferentes aristas en las que se desenvuelve el deporte de alta competición. Por consiguiente, en el mismo se engloban todos los “*valores sociales inherentes al deporte*”, entre los que se incluyen el juego limpio, la igualdad en la competición o encuentro, la ética deportiva, etc., pero no sólo estos: autores como BENÍTEZ ORTÚZAR y MORILLAS CUEVAS también defienden que el deporte es un instrumento de educación que traspasa fronteras, el cual tiene una serie de normas o reglas “no escritas” que son aceptadas por todos los deportistas, incluso entre deportistas nacionales de Estados sin relaciones diplomáticas o que se encuentran inmersos en estado de guerra. Por ello, los defensores de esta teoría confirman a la integridad deportiva como un valor a tutelar en sí mismo, esto es, que tiene la entidad suficiente para ser considerado como un bien jurídico propio, siempre y cuando la intervención del Derecho penal sea mínima, es decir, garantizando el principio de intervención mínima²⁷.

Esta tesis, en su momento, supuso toda una innovación, pero eso no ha evitado que haya sido objeto de oposición, siendo una de las mayores críticas a esta teoría su indefinición, en el sentido de que no ofrece una concreción material que establezca los límites de actuación que justifiquen la intervención del Derecho penal²⁸.

D. Corrientes eclécticas.

Por último, cabe mencionar otras de las teorías surgidas tras la reforma penal del 2015, que son las corrientes eclécticas, las cuales dotan al bien jurídico de un doble matiz económico-deportivo; es decir, se trataría de teorías mixtas de las anteriores, en las que se uniría la protección del juego limpio con los intereses económicos derivados de la competición o encuentro de especial relevancia. Por tanto, se podría entender el “*fair play*” como el objeto directo de protección, pero este sólo podría alcanzar la categoría de

²⁷ Ambos autores defienden esta tesis en sus respectivas obras. MORILLAS CUEVA, Fraude en el deporte, 2017, pp. 47-49; BENÍTEZ ORTÚZAR, Delito de “Fraudes deportivos”, 2011, pp. 118-120.

²⁸ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de Corrupción Deportiva, 2018, p. 71.

bien jurídico-*penal* cuando comprometa intereses económicos vinculados a la prueba o competición deportiva²⁹.

En conclusión, la última corriente expuesta es la más válida a la hora de establecer el bien jurídico protegido de este tipo penal. Esta teoría es la que se acerca en mayor medida a lo que se pretende proteger con la tipificación del delito de corrupción deportiva, más aún cuando en la reforma del 2015 se hacía referencia a la “*especial relevancia económica o deportiva*”: la teoría se cumple, o se ve reflejada, en este doble matiz que exige la ley, pues no sólo establece la protección del juego limpio o los valores inherentes del deporte, sino también la de los intereses económicos derivados del “*mercado del deporte*”, como bien denomina SÁNCHEZ BERNAL³⁰. Por tanto, nos encontramos ante un delito de carácter socioeconómico, en donde la adulteración o predeterminación del resultado deportivo se constituiría como el modo de atacar el bien jurídico protegido, de tal manera que solamente intervendría el orden penal ante la puesta en peligro de los intereses económicos del mercado del deporte efectuada a través de la alteración o predeterminación fraudulenta y deliberada del resultado deportivo³¹.

²⁹ IBARS VELASCO, en: Quintero Olivares (Dir.), Comentario, 2015, pp. 580-584.

³⁰ Denomina “mercado del deporte” a la combinación de los intereses económicos de los deportistas, árbitros, entrenadores o clubes, derivados del ejercicio de la profesión y de los éxitos deportivos, así como también incluye en este mercado los beneficios derivados de un determinado patrocinio, los derechos económicos de explotación audiovisual, el pago de entradas y suscripción a paquetes deportivos en televisión, entre otros. SÁNCHEZ BERNAL, Delito de Corrupción Deportiva, 2018, p. 78.

³¹ *Ibid.*, p. 79.

IV. ELEMENTOS DEL TIPO.

A. CORRUPCIÓN ACTIVA Y CORRUPCIÓN PASIVA.

En primer lugar, antes de examinar los elementos del tipo en el delito de la corrupción en el deporte, es preciso diferenciar en el marco del 286 bis la corrupción activa de la corrupción pasiva, pues al igual que ocurre con el delito de cohecho, la corrupción entre particulares es bidireccional.

En este aspecto, ENCINAR DEL POZO³² expone que puede haber dos criterios de distinción entre un tipo de corrupción y otra. Por un lado, sería el criterio del sujeto de quien parte la iniciativa, ante lo cual, será activa cuando el sujeto activo es quien promete, ofrece o concede la dádiva o beneficio; mientras que será pasiva cuando el sujeto activo es quien la recibe, solicita o acepta. Sin embargo, como explica el propio autor, esta distinción no sería del todo adecuada, porque en ambos supuestos se pueden dar conductas activas de corromper y pasivas de dejarse corromper.

Por otro lado, está el criterio que diferencia entre la persona que es ajena a un ente empresarial y la que está integrada en el mismo. Siguiendo tal distinción, estaremos ante una corrupción activa³³ cuando la acción es cometida por la persona ajena o externa al ente empresarial; es decir, “*quien por sí o por persona interpuesta*” prometa, ofrezca o conceda a empleados, administradores o directivos un beneficio no justificado de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, con el fin de que se le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros. Y, estaremos ante una corrupción pasiva³⁴ cuando la acción es cometida por la persona que se encuentra integrada en el ente empresarial; esto es, el directivo, el empleado o el administrador de una empresa o sociedad, que por sí o por persona interpuesta, solicite, reciba o acepte un beneficio no

³² ENCINAR DEL POZO, Delito de corrupción privada, 2016, pp. 279-280.

³³ Artículo 286 bis. 2 CP: “*Con las mismas penas será castigado quien, por sí o por persona interpuesta, prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales*”.

³⁴ Artículo 286 bis. 1 CP: “*El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja*”.

justificado, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro³⁵.

Atendiendo a estos criterios de diferenciación en la corrupción privada, se puede establecer en el delito específico de la corrupción en el deporte que estaremos ante una modalidad activa cuando la persona ajena a la entidad deportiva (aunque sobre esto se discutirá más adelante) prometa, conceda u ofrezca una ventaja o beneficio no justificado, de cualquier naturaleza, a los deportistas, directivos o empleados, etc., de una entidad deportiva, con el fin de que realicen un acto u omisión que estén encaminados a predeterminar o alterar de forma fraudulenta el resultado de un encuentro o competición deportiva³⁶; y estaremos ante una modalidad pasiva cuando la persona perteneciente a una entidad deportiva realice un acto intencionado de solicitar, recibir o aceptar una ventaja o beneficio no justificado, de cualquier naturaleza, con el fin de realizar un acto u omisión dirigidos a predeterminar o alterar de manera fraudulenta y deliberada el resultado de una prueba o competición deportiva³⁷.

³⁵ ENCINAR DEL POZO, Delito de corrupción privada, 2016, pp. 280-281.

³⁶ PÉREZ FERRER, en Morillas Cuevas (Dir.), Respuestas jurídicas, 2017, p. 77.

³⁷ *Ibid.*, p. 78.

B. EL TIPO OBJETIVO.

1. LOS SUJETOS.

Los elementos típicos del delito de corrupción en el deporte (286 bis. 4 CP), como se ha mencionado anteriormente, también han generado gran debate por los problemas de interpretación que la ambigua redacción de este artículo genera, más aún cuando en su primera línea se establece que “*lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos...*”. Por tanto, existe una primera remisión a los apartados anteriores del art. 286 bis, de la que se desprende que el esquema del delito de corrupción privada será de aplicación en la corrupción deportiva en todo lo que no se contraponga en esta figura específica³⁸.

Partiendo de esta base, en lo referente a los sujetos de este hecho ilícito, hay que tener en cuenta que en el delito de corrupción en el deporte también nos vamos a encontrar con dos tipos de modalidades, al igual que sucede en el delito de corrupción privada. Por ello, en el momento de examinar los sujetos activos de este tipo penal, nos encontraremos con que estos serán diferentes dependiendo si se trata de una modalidad activa o de una modalidad pasiva. En este sentido, SÁNCHEZ BERNAL califica como figura delictiva común la modalidad activa, pues el delito podría ser cometido por cualquier persona (si bien sobre esto existe debate); y califica como un delito especial la modalidad pasiva de la corrupción deportiva³⁹.

a) Sujetos activos en la corrupción activa.

La corrupción deportiva activa se obtiene de la combinación del apartado segundo y cuarto del artículo 286 bis CP. Con ello, los sujetos activos de este tipo de modalidad serán las personas que puedan prometer, ofrecer o conceder una ventaja o beneficio no justificados con el fin de predeterminar o alterar, de forma deliberada y fraudulenta, el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva.

³⁸ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, p. 81.

³⁹ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, p. 84.

En primer lugar, cabe mencionar que, en el análisis de este elemento del tipo, existen diversas corrientes sobre cuáles serían los sujetos activos en la modalidad activa, esto es, que al igual que ocurre con el bien jurídico protegido, existe un gran debate entre los expertos en esta materia⁴⁰. A pesar de ello, en este caso sólo se procederá a exponer la teoría alternativa, la que entiende esta modalidad de corrupción como un delito común, que en mi opinión sería la teoría correcta.

La teoría alternativa interpreta este elemento del tipo de una manera amplia, y no desde una perspectiva más restrictiva como ocurre en otras dos corrientes⁴¹, es decir, conforme a esta teoría se entiende que no sólo las personas pertenecientes al ámbito del deporte pueden tener la condición de corruptores, sino que se interpreta que puede ostentar la condición de sujeto activo cualquier persona que realice la conducta típica⁴², ya sea perteneciente o no al ámbito del deporte o de la entidad deportiva.

En este sentido, aunque se reconozca que en la práctica lo más probable es que los autores del delito de la corrupción deportiva activa pertenezcan a este ámbito o a una entidad deportiva, este no sería motivo “suficiente para excluir *ex lege* la posibilidad de comisión delictiva por parte de otras personas físicas o jurídicas”⁴³. Por tanto, el marco de los sujetos activos de este tipo penal no quedaría restringido a los sujetos enunciados en la norma (esto es: los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, ni deportistas, árbitros o jueces), sino que, por conexión con el art. 286 bis.2, se deja abierta la posibilidad de que una persona ajena a éstas y a este ámbito específico también pueda ser considerada como sujeto activo de esta conducta delictiva.

Esta teoría, aunque no es la más seguida por la doctrina, es defendida por varios autores⁴⁴, pues en su opinión esta postura es la que más concuerda con el principio de legalidad y con la rigurosa aplicación de los principios hermenéuticos generales. Además, los mismos autores consideran que esta opción sería la más beneficiosa en el marco de la

⁴⁰ Véanse las diferentes teorías sobre los sujetos activos en la modalidad activa de la corrupción en el deporte en SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, pp. 108-115.

⁴¹ Las dos teorías enunciadas son: la teoría mayoritaria, que considera la modalidad activa también como un delito especial, por lo que sólo podrían ser sujetos activos los enunciados en la norma (directivos, administradores, deportistas, etc.); y la teoría minoritaria, que restringe el marco de sujetos activos (sólo se considera como tales a los directivos, administradores, colaboradores o empleados), partiendo de la base de que se trata de un delito especial. *Ibid.*, pp. 109-115.

⁴² ANARTE BORRALLA/ROMERO SÁNCHEZ, REPC, 14-20, 2012, pp. 26-27.

⁴³ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, p.112.

⁴⁴ Esta teoría alternativa que considera la modalidad activa de la corrupción en el deporte como un delito común es defendida por autores como: GILI PASCUAL, SÁNCHEZ BERNAL y ANARTE BORRALLA, entre otros.

política-criminal, pues desde esta perspectiva se podría hacer frente a uno de los problemas criminológicos que está en auge en los últimos tiempos, como son las apuestas deportivas y la vinculación que tienen éstas con el crimen organizado⁴⁵.

Teniendo en cuenta estos aspectos mencionados, puede ocurrir en el marco de la actividad deportiva que un sujeto externo a dicha actividad realice la conducta típica de esta acción penal. Esto es, que un sujeto no perteneciente a una entidad deportiva y sin vinculación con este ámbito decida prometer, ofrecer o conceder un beneficio o ventaja, no justificados, con el fin de predeterminar o alterar de manera fraudulenta una prueba o competición de especial relevancia, para así verse beneficiado en algún aspecto, ya sea porque ha realizado alguna apuesta a ese encuentro o competición o porque simplemente tenga un interés personal en dicha competición. Por tanto, se dé de esa manera o no, se puede observar que, aun tratándose de una persona ajena a este ámbito, también podría realizar la conducta típica y poner en peligro el bien jurídico que esta norma penal quiere proteger. De esta forma, en mi opinión, esta sería la teoría acertada, pues se entiende que puede ser sujeto activo tanto una persona perteneciente a este ámbito específico como también lo puede ser una persona totalmente ajena a tal ámbito.

En conclusión, podrá ser sujeto activo en la corrupción en el deporte en su modalidad activa “cualquier persona con aptitud en abstracto para conseguir poner en peligro”⁴⁶ el bien jurídico protegido.

b) Sujetos activos en la corrupción pasiva.

La corrupción deportiva pasiva la obtenemos de la combinación del apartado primero y cuarto del artículo 286 bis CP. En esta modalidad de corrupción, los sujetos activos serán las personas pertenecientes a una entidad deportiva o a este ámbito específico del deporte que se indicarán a continuación y que reciban, soliciten o acepten un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para sí o para un tercero, con el fin de predeterminar o alterar, de forma deliberada y fraudulenta, el resultado de

⁴⁵ GILI PASCUAL, RDPC, 8, 2012, p. 29.

⁴⁶ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, p. 89.

una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva.

A diferencia de lo que ocurre en la modalidad activa según la teoría defendida, la corrupción deportiva pasiva es considerada como un delito especial, en la medida en que sólo podrán ser sujetos activos los enunciados por la norma, es decir, sólo podrán ser autores de este tipo delictivo los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva y los deportistas, árbitros o jueces. Cabe decir que este elenco de sujetos procede de la teoría mayoritaria, pero existe también una teoría minoritaria⁴⁷ que reduce a estos posibles sujetos activos en esta modalidad de corrupción en el deporte, considerando que sólo podrán ser sobornados los deportistas, árbitros o jueces intervinientes en una prueba o competición deportiva, puesto que sólo ellos podrán influir en el resultado de dicha prueba o competición.

Según la teoría mayoritaria, en cambio, serán sujetos activos todos los mencionados por el tipo, como se ha explicado anteriormente. En otras palabras, podrán ser sujetos activos de este delito las personas que puedan intervenir en la competición deportiva, de alguna forma u otra, antes, durante o después de la celebración de tal evento⁴⁸. Pero, antes de entrar a analizar cada uno de estos sujetos en cuestión, es preciso comentar dos aspectos al respecto. Por un lado, como afirman ANARTE BORRALLLO y ROMERO SÁNCHEZ, cabe mencionar que *“llama la atención la amalgama que conforman los sujetos activos de esta modalidad de corrupción deportiva. Esto implica la equiparación, sin coherencia ni proporcionalidad alguna, de actores muy dispares, y con capacidades de realización de la conducta típica —es decir, la manipulación del resultado— totalmente distintas, en el seno de esta figura. Para comprobar lo disparatado de estas homologaciones basta comparar, por ejemplo, el estatuto de un director deportivo con el de un utillero, el de un árbitro de fútbol con el de un entrenador de porteros, o, en fin —para no multiplicar los ejemplos—, el del practicante de un deporte de equipo con el de un deporte individual, todos ellos posibles sujetos activos del delito”*⁴⁹. Por otro lado, es conveniente resaltar la diferenciación que hace el legislador entre dos tipos de sujetos: separa por un lado a los directivos, administradores, empleados

⁴⁷ Véase el análisis de esta teoría minoritaria en SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, pp. 104-105.

⁴⁸ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de Corrupción deportiva, 2018, pp. 85-86.

⁴⁹ ANARTE BORRALLLO/ROMERO SÁNCHEZ, RECPD, 14-20, 2012, p. 17.

o colaboradores de una entidad deportiva; y por otro lado sitúa a los deportistas, árbitros o jueces⁵⁰.

- **Directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva.**

El primer bloque de sujetos activos en esta modalidad reproduce la redacción del delito de corrupción privada del 286 bis.1, en la cual se hace referencia a los directivos, administradores, empleados o colaboradores en el seno de una entidad jurídica; por ello, para la corrupción deportiva, se deduce que los particulares que no pertenezcan a una “entidad deportiva” no podrán ser sujetos activos en la corrupción en el deporte. Además, hay que tener en cuenta que en la redacción de la norma no hay una distinción entre las diferentes personas que ocupan distintos puestos dentro de la entidad, estableciendo los mismos efectos punitivos a pesar de los diferentes grados de responsabilidad y capacidad de acción dentro de la entidad. Con esto, el precepto busca incluir a cualquier representante o trabajador de la entidad deportiva⁵¹. Por ello, a continuación se procederá a examinar cada una de las figuras por separado.

- Directivo.

Esta primera figura adolece de cierta indefinición, debido a que se trata de una figura que se remite del delito de corrupción privada y ni el propio delito de la corrupción deportiva ni la propia ley sectorial del deporte ofrecen un concepto de “directivo”. Teniendo en cuenta esta falta de definición, se podrá considerar como directivos en el ámbito del deporte a las personas que ostenten un cargo dentro de la cúpula de la entidad deportiva, es decir, los que vengan fijados con tal rango en las normas generales de distribución de competencias de la propia entidad⁵². En este punto, también habrá que tener en cuenta si nos encontramos con un club deportivo o en una Sociedad Anónima Deportiva. En el primer caso, al tener que seguir las normas de la ley sectorial deportiva⁵³ para poder inscribirse en el Registro de Asociaciones Deportivas, estas figuras quedarán

⁵⁰ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, p. 89.

⁵¹ ENCINAR DEL POZO, Delito de corrupción privada, 2016, pp. 287-288.

⁵² ANARTE BORRALLA/ROMERO SÁNCHEZ, RECPD, 14-20, 2012, p. 17.

⁵³ Véase los artículos 15, 16 y 17 de la Ley del Deporte sobre los requisitos de inscripción de los clubes deportivos.

fijadas con certeza y no habría problema para saber quién ostenta el cargo de directivo en estas entidades⁵⁴. En cambio, en el segundo caso, lo normal es que exista un Consejo de Administración, por lo que cabe la posibilidad de que no exista esta figura como tal en estas entidades, y en el caso de que exista dicho cargo, este no podrá ser miembro del Consejo; por tanto, en estas entidades serán directivos los que tengan atribuida tal función, en virtud de algún título que sea válido para tal fin, excluyendo de tal modo a los “directivos de hecho” como posibles sujetos del tipo penal, pues estos no han sido incluidos expresamente por la norma⁵⁵, al igual que ocurre con los administradores de hecho, como se expondrá a continuación.

- Administrador.

En segundo lugar, nos encontramos con un grupo similar al de los directivos, en el sentido de que estos también se encontraran integrados en la cúpula de la entidad deportiva. Este cargo lo ostentarán las personas que tengan la capacidad de administrar la entidad deportiva dentro del organigrama organizativo previsto por ella⁵⁶. Y a diferencia que ocurre con los directivos, los administradores serán más fáciles de identificar en las Sociedades Anónimas Deportivas, pues estos serán los miembros del Consejo de Administración de la sociedad⁵⁷. El problema que ocurre con esta figura, y que autores como ANARTE BORRALLLO, SÁNCHEZ BERNAL o ROMERO SÁNCHEZ han tomado en consideración, es que en este precepto penal no se nombra a los administradores de hecho junto a los administradores de derecho, por lo que, en opinión de estos autores, los administradores de hecho quedarían fuera del tipo penal, lo que no sería deseable desde el punto de vista político-criminal⁵⁸.

- Empleado.

Esta figura se refiere a los sujetos que, sin pertenecer a ninguna de las categorías anteriores, se encuentran dentro del organigrama organizativo de la sociedad, esto es, las personas que trabajen por cuenta ajena en la entidad deportiva⁵⁹. En este punto, algunos

⁵⁴ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, pp. 88-89.

⁵⁵ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, pp. 97-98.

⁵⁶ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, pp. 89-90.

⁵⁷ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, p. 90.

⁵⁸ ANARTE BORRALLLO/ROMERO SÁNCHEZ, RECPD, 14-20, 2012, p. 17. En el mismo sentido lo expone SÁNCHEZ BERNAL, Delito de Corrupción deportiva, 2018, p. 90.

⁵⁹ PÉREZ FERRER, en Morillas Cuevas (Dir.), Respuestas jurídicas, 2017, p. 73.

autores se cuestionan si, para formar parte de esta categoría, los trabajadores han de serlo de forma permanente o temporal, pero acaban dando cabida a ambos tipos, pues siendo de una modalidad u otra, seguirán siendo denominados como “empleados”⁶⁰. Otro de los aspectos a destacar en esta posición para poder ser considerado como sujeto activo del delito, según alguna doctrina, es que dentro de sus funciones tenga un mínimo de capacidad de decisión dentro de la entidad deportiva⁶¹. Pues es evidente que si no gozan de tal capacidad es prácticamente imposible que puedan realizar la finalidad perseguida con el soborno, esto es, que no tendrían capacidad para predeterminar o alterar el resultado de un encuentro o competición deportiva. En estos casos, se estaría ante un soborno inidóneo, en donde se ha realizado la conducta típica, pero en donde la finalidad nunca habría podido cumplirse por la falta de capacidad de predeterminar o alterar el resultado de la persona sobornada. Estas acciones inidóneas se expondrán más adelante.

- Colaborador.

Por último, nos encontramos con la figura del colaborador, que junto a la del directivo adolece de cierta indeterminación⁶². Ello se debe a que se remite del delito de corrupción privada, pues este cargo no viene regulado específicamente en la normativa sectorial deportiva. Ante esto, realizando una interpretación prudente de esta figura, se podría considerar como tales a los sujetos que, sin tener un vínculo laboral, mantengan una relación de prestación de servicios con la entidad deportiva⁶³. Por tanto, con el fin de evitar lagunas punitivas, el colaborador se configura como una categoría residual de personas que no encajan en ninguna de las otras modalidades, pero que mantienen relaciones, más bien inciertas, de prestación de servicios con la entidad deportiva⁶⁴.

- ¿El titular de la entidad deportiva?

Por último, en relación a este bloque de sujetos, es preciso mencionar la figura del titular de la entidad deportiva. A diferencia de lo que ocurre en el delito de corrupción privado, en donde la doctrina mayoritaria considera que tal figura se debe excluir⁶⁵, en el

⁶⁰ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, p. 98.

⁶¹ BENÍTEZ ORTÚZAR, Delito de “Fraudes deportivos”, 2011, p. 137.

⁶² SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, pp. 92-93.

⁶³ GILI PASCUAL, RDPC, 8, 2012, pp. 62-63.

⁶⁴ ANARTE BORRALLÓ/ROMERO SÁNCHEZ, RECPC, 14-20, 2012, pp. 17-18.

⁶⁵ ENCINAR DEL POZO, Delito de corrupción privada, 2016, pp. 299-301.

delito de corrupción en el deporte, autores como BENÍTEZ ORTÚZAR⁶⁶ opinan que esta figura debería entenderse como posible sujeto activo, siempre y cuando ostente algunas de las cualidades que son exigidas por el tipo penal⁶⁷. En definitiva, se considera que el titular de la entidad deportiva debería incluirse como posible sujeto activo en una futura reforma de la ley.

- **Deportistas, árbitros o jueces.**

En este segundo bloque nos encontramos con sujetos que son específicos de esta modalidad de corrupción, es decir, que son una extensión de los ya indicados en el delito de corrupción entre particulares⁶⁸. Estas figuras no están tampoco definidas como tal en la Ley del Deporte, pero sí aparecen reflejadas en algunos de sus preceptos, por lo que, a diferencia de lo que ocurre en las figuras del primer bloque de sujetos, su determinación no revestirá tanta complejidad.

- Deportista.

Una primera definición de esta figura la podemos obtener del Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas, que define deportista como toda persona o grupo de personas que participe en competiciones deportivas⁶⁹. Junto a esta definición, algunos autores han precisado la necesidad de que, para ser considerado deportista, esa persona tiene que disponer de una licencia federativa correspondiente a la federación en la que compita⁷⁰, la cual es un requisito imprescindible en las competiciones de especial relevancia económica o deportiva. Por tanto, se puede decir que será deportista toda persona que participe activamente en una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva.

En torno a esta figura de “deportista” surge el debate sobre si la misma era necesaria, pues se puede llegar a comprender a estos sujetos dentro de la categoría de

⁶⁶ BENÍTEZ ORTÚZAR, Delito de “Fraudes deportivos”, 2011, pp. 137-138.

⁶⁷ También defienden esta teoría autores como ANARTE BORRALLO y ROMERO SÁNCHEZ en ANARTE BORRALLO/ROMERO SÁNCHEZ, RECPC, 14-20, 2012, p. 18.

⁶⁸ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, p. 98.

⁶⁹ Definición obtenida del artículo 6.3. a) del Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas, que está aún pendiente de ser firmada y de entrar en vigor.

⁷⁰ BENÍTEZ ORTÚZAR, Delito de “Fraudes deportivos”, 2011, pp. 138-139.

empleados⁷¹. Esta reflexión parecería obvia si todos los deportistas perteneciesen a una entidad deportiva, como ocurre en deportes colectivos, ya sea el baloncesto, el balonmano o el fútbol. Pero existen competiciones de especial relevancia en las que participan deportistas que no realizan su actividad bajo el nombre de una entidad deportiva, como suele ocurrir en los deportes individuales, entre los que se puede mencionar el boxeo, la esgrima o el tenis. En definitiva, esta figura sirve para encuadrar a los sujetos que no se encuentran sometidos a la disciplina organizativa de un grupo o club deportivo⁷².

- Árbitro o juez.

Esta última figura se refiere a los sujetos encargados de dirigir y controlar las pruebas o competiciones deportivas, en las que hay que tener en cuenta tanto a los jueces o árbitros principales como a los auxiliares⁷³. Por tanto, se hace referencia a las personas que, asumiendo su deber de imparcialidad, tienen la potestad disciplinaria durante el desempeño de la prueba y cuya función fundamental es velar por el correcto desarrollo de la misma, para que se celebre bajo las normas de la determinada modalidad deportiva de que se trate⁷⁴. Cabe precisar que sólo podrá considerarse como árbitro o juez a los sujetos que, cumpliendo tales funciones, también participen directamente en el encuentro sobornado⁷⁵.

c) Sujetos pasivos en la corrupción deportiva.

A diferencia de los sujetos activos, los sujetos pasivos del delito son los titulares del bien jurídico protegido⁷⁶. Esto genera una controversia a la hora de fijar cuales serán estos sujetos, pues como se ha analizado anteriormente, existen diversas teorías de cuál es el bien jurídico tutelado por esta norma, por lo que según la corriente que se siga, los sujetos pasivos podrán ser unos u otros.

⁷¹ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, p. 99.

⁷² CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, p. 104.

⁷³ ANARTE BORRALLA/ROMERO SÁNCHEZ, REPC, 14-20, 2012, p. 19.

⁷⁴ Así se regula en los artículos 74.1 y 74.2 a) de la LD, en donde, dependiendo de la modalidad deportiva de la que se trate, habrá que acudir a la normativa de la federación concreta para saber las funciones específicas de esta figura.

⁷⁵ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, p.106.

⁷⁶ ENCINAR DEL POZO, Delito de corrupción privada, 2016, p. 286.

En este sentido, FERRER PÉREZ denomina como sujetos pasivos a todas *“las personas que confían en que se respeten las reglas preestablecidas, teniendo presente, además, que al mediar un soborno, se frustran injusta y anticipadamente sus legítimas expectativas, impidiendo de este modo garantizar efectivamente el “juego limpio” y los intereses económicos como un verdadero bien jurídico supraindividual”*⁷⁷.

Otros autores⁷⁸ distinguen entre el sujeto pasivo del delito y el sujeto pasivo de la conducta típica⁷⁹. Por un lado, se encontraría como sujeto pasivo del delito la comunidad social en su conjunto y, por otro lado, el sujeto pasivo de la conducta en la modalidad activa sería el deportista, juez, árbitro, directivo, administrador, empleado o colaborador de la entidad deportiva; mientras que, en la modalidad pasiva, sería cualquier persona. Todo ello, a tenor de la tesis sobre los sujetos seguida en el presente trabajo.

En definitiva, partiendo de la denominación dada del sujeto pasivo y, tomando como referencia las corrientes eclécticas para fijar el bien jurídico protegido, se podría establecer que los sujetos pasivos del delito serán todas las personas pertenecientes al “mercado del deporte”⁸⁰, en donde quedan incluidos los aficionados, los deportistas, los derechos televisivos, los patrocinios, etc., por tanto, no haría falta hacer una distinción de los sujetos pasivos, sino que se encontrarían todos enmarcados en el mismo.

d) Las entidades deportivas.

En la corrupción deportiva, a diferencia de lo que ocurre en el delito de corrupción privada, los directivos, administradores, empleados o colaboradores deberán realizar sus funciones en una “entidad deportiva cualquiera que sea la forma jurídica de esta”, es decir, que no bastará con que sea una entidad mercantil o una sociedad⁸¹. Por ello, es necesario establecer qué se entiende por entidad deportiva.

Esta terminología, poco precisa sobre las entidades deportivas, también ha generado varias interpretaciones al respecto. Autores como CORTÉS BECHIARELLI⁸² y

⁷⁷ FERRER PÉREZ, en Morillas Cuevas (Dir.), Respuestas jurídicas, 2017, p. 74.

⁷⁸ Esta distinción la realiza el autor BENÍTEZ ORTÚZAR, Delito de “Fraudes deportivos”, 2011, p. 156.

⁷⁹ Para un mejor entendimiento sobre esta distinción de los sujetos pasivos véase LUZÓN PEÑA, Lecciones, 3ª ed., 2016, 12/54.

⁸⁰ Se hace referencia a la definición de este término en el apartado d) del bien jurídico protegido.

⁸¹ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, p. 94.

⁸² CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, pp. 158-160.

BENÍTEZ ORTÚZAR⁸³ opinan que lo más acertado sería realizar una interpretación restrictiva de este término, en el sentido de que se entienda sólo como entidades deportivas a los denominados clubs deportivos. El motivo reside en que son estas entidades las que realmente compiten en las pruebas, encuentros o competiciones deportivas de especial relevancia⁸⁴, dejando fuera del concepto de entidades deportivas, por tanto, a las federaciones o las ligas profesionales que, aunque son las que organizan tales competiciones y eventos, no son participantes de la competición o encuentro.

En conclusión, atendiendo a este criterio de interpretación restrictiva, según el cual se entiende como entidades deportivas a los clubs deportivos, podemos encontrar una definición de estas en la normativa vigente de este ámbito, más concretamente en el artículo 13 LD. Este precepto define los clubs deportivos como *“las asociaciones privadas, integradas por personas físicas o jurídicas que tengan por objeto la promoción de una o varias modalidades deportivas, la práctica de las mismas por sus asociados, así como la participación en actividades y competiciones deportivas”*.

⁸³ BENÍTEZ ORTÚZAR, Delito de “Fraudes deportivos”, 2011, pp. 130-136.

⁸⁴ *Ibid.*, p. 134.

2. CONDUCTA TÍPICA.

a) La especial relevancia económica o deportiva de la competición.

En primer lugar, antes de analizar las conductas de este tipo delictivo, es conveniente precisar el ámbito en el que han de enmarcarse. Esto es, a qué competiciones deportivas afecta este tipo penal. Cabe apuntar que, con la entrada en vigor de este delito con la LO 5/2010, la norma restringía su ámbito de aplicación a las competiciones que eran consideradas como “profesionales”. Pero, atendiendo a las dificultades interpretativas que esta calificación ofrecía, se decidió modificar sustancialmente el ámbito de aplicación de la corrupción deportiva⁸⁵. Por ello, con la entrada en vigor de la LO 1/2015, se sustituyó el término de “profesional” por el enunciado de “especial relevancia económica o deportiva”, dejando el carácter de profesional para el tipo agravado del artículo 286 *quater* CP⁸⁶. Por tanto, esta modificación supuso una ampliación de los acontecimientos deportivos a los que se les podrá aplicar este delito⁸⁷, lo que hace necesario examinar qué se entiende por “especial relevancia económica o deportiva”, para poder acotar el marco de actuación de la intervención penal.

▪ Especial relevancia económica.

Una primera explicación sobre lo que se entiende por competición deportiva de especial relevancia económica la expone el propio legislador en la norma, a cuyo tenor: *“se considerará competición deportiva de especial relevancia económica, aquélla en la que la mayor parte de los participantes en la misma perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad”*.

Ante esta definición de lo que se considera competición de especial relevancia económica, es menester realizar un par de anotaciones. Por un lado, la imprecisión en el momento de cuantificar la cantidad de participantes necesarios que deben percibir una retribución por realizar la actividad. Es decir, sólo se contempla que deben ser la “mayor parte de los participantes”. Por tanto, con base en la interpretación de esta expresión, para que se dé el hecho típico, deberán ser retribuidos al menos la mitad de los participantes

⁸⁵ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, p. 142. Así mismo, en las páginas 138 a 142, se exponen los motivos y objeciones de la doctrina al adjetivo de “profesional” de las competiciones deportivas.

⁸⁶ Art. 286 *quater* CP: “En el caso del apartado 4 del artículo 286 bis, los hechos se considerarán también de especial gravedad cuando: [...]. b) sean cometidos en una competición deportiva oficial de ámbito estatal calificada como profesional o en una competición deportiva internacional”.

⁸⁷ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, p.143.

más uno, pues de ese modo ya se cumpliría esa mayoría simple de los participantes requerida por la norma. Por otro lado, resulta problemática la equiparación que se realiza entre retribución y compensación o ingreso económico, cuando existen unas diferencias importantes entre estos conceptos: pueden existir compensaciones tales como los gastos de desplazamiento para que se acuda a los entrenamientos o a la misma competición; o también pueden realizarse ingresos económicos por alcanzar objetivos, y en el caso de que no se cumplieran dichos objetivos, los ingresos tampoco se producirían, por lo que en estas situaciones no se estaría ante una competición de especial relevancia económica⁸⁸, pues no se percibiría ninguna retribución, compensación o ingreso económico.

Teniendo en cuenta estas observaciones, en opinión de PÉREZ FERRER, a la que me adhiero, la especial relevancia económica no solo vendrá marcada por la retribución a los deportistas, sino que habrá que tener en consideración otros factores externos, que incrementan la relevancia económica de estas competiciones deportivas. Estos factores pueden ser: la publicidad del encuentro deportivo, la audiencia que con él se genera y los medios de comunicación intervinientes, así como la cantidad de apuestas que se realicen a tenor de tal evento⁸⁹.

- Especial relevancia deportiva.

El legislador también da una definición de la especial relevancia deportiva, al establecer que se considerará *“competición deportiva de especial relevancia deportiva, la que sea calificada en el calendario deportivo anual aprobado por la federación deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad, o disciplina de que se trate”*.

Atendiendo a esto, estaremos ante una competición de especial relevancia deportiva cuando esta sea “oficial” y se trate de la “máxima categoría”. Este carácter oficial de la prueba o competición deportiva nos lo da la propia Ley del Deporte⁹⁰, al establecer que: *“Son competiciones oficiales de ámbito estatal aquellas que así se califiquen por la correspondiente Federación deportiva española, salvo las de carácter profesional, cuya calificación corresponderá al Consejo Superior de Deportes”*. Por ello,

⁸⁸ PÉREZ FERRER, en Morillas Cuevas (Dir.), Respuestas jurídicas, 2017, pp. 80-81.

⁸⁹ *Ibid.*, p. 81.

⁹⁰ Esta definición de competición oficial la encontramos en el artículo 46.2 de la Ley del Deporte.

se deberá estar a lo dispuesto por la Federación deportiva, a la cual corresponde especificar cuáles son las competiciones oficiales de ámbito estatal en el momento de aprobar el calendario deportivo anual⁹¹. En relación a ello, también habrá de atenerse a lo dispuesto en el calendario deportivo de cada modalidad para saber cuándo se está ante una competición oficial de la “máxima categoría”⁹².

Por tanto, será la propia Federación la que defina cuáles serán las competiciones de especial relevancia deportiva. A modo de ejemplo, SÁNCHEZ BERNAL⁹³ enmarca como competiciones oficiales, de máxima categoría y de ámbito estatal, a las siguientes competiciones: la Liga ASOBAL de balonmano, la Liga Iberdrola (Primera división del fútbol femenino), la Liga Femenina de baloncesto y la División de Honor del fútbol sala o el waterpolo.

Por último, y a tenor de lo expuesto, cabe mencionar que se encuentran excluidas del tipo básico las competiciones que revistan el carácter de profesional y las competiciones internacionales, las cuales entrarán dentro del ámbito del tipo agravado específico del artículo 286 quater CP. Entre estas se encuentran por ejemplo: la Liga Santander (Primera división de fútbol masculino) y la Liga Endesa de baloncesto (Liga ACB).

b) La conducta típica en los amaños de los encuentros y eventos deportivos en el delito de la corrupción en el deporte.

La conducta típica en la corrupción deportiva está vinculada al delito de corrupción privada, como así ocurriera con los elementos de los sujetos, a tenor de la cláusula de remisión que impone el propio precepto, al configurar que *“lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos...”*. Por ello, la conducta típica será diferente dependiendo de la modalidad de corrupción de que se trate. En la activa, consistirá en ofrecer, prometer o conceder un beneficio o ventaja no justificado; en cambio, en la pasiva se consumará al recibir, solicitar o aceptar, del incentivo no justificado.

⁹¹ Así se regula en el artículo 15.3 b), del RD 1835/1991 sobre Federaciones deportivas españolas.

⁹² SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, p. 147.

⁹³ *Ibid.*, p. 148.

Antes de entrar analizar las conductas típicas en las diferentes modalidades de corrupción es necesario realizar algunas consideraciones previas.

En primer lugar, hay que resaltar que la corrupción en el deporte es un delito de conducta bilateral o de encuentro⁹⁴, pues para su consumación es necesario que existan dos sujetos contrapuestos, es decir, tiene que haber un sujeto que promete, ofrece o concede el beneficio o ventaja injustificado, y otro sujeto que lo solicita, lo recibe o lo acepta⁹⁵. Además, en este aspecto hay que tener en cuenta que se trata de un delito de mera actividad y está configurado para penalizar todas las posibles formas de realización del soborno, con independencia de qué sujeto haya tomado la iniciativa en la acción y de que se llegue o no a cumplir o a entregar el beneficio o ventaja no justificado⁹⁶.

En segundo lugar, es necesario hacer referencia al objeto material al que se dirige la conducta, esto es, “el beneficio o ventaja no justificado de cualquier naturaleza”. Se está ante dos conceptos de características similares, entre los que es difícil encontrar una diferencia sustancial⁹⁷, pero el legislador ha optado por incluirlos. Ante lo cual, se puede entender por *beneficio* la ganancia o el provecho, de naturaleza económica o de otro tipo, que se puede obtener o entregar, para que se produzca la predeterminación o adulteración del resultado del evento deportivo. Y por *ventaja* se entenderá la condición favorable que una persona tiene cuando se produce esa adulteración del resultado⁹⁸. En lo relativo al término de “no justificado”, se entenderá por tal al beneficio o ventaja que el sujeto no está facultado para recibir, entendiéndose por ello a algo indebido que prohíbe expresamente la ley o las normas que regulan su actividad⁹⁹. Y, para finalizar, en lo referente a que el beneficio o ventaja puede ser “de cualquier naturaleza”, se debe entender que tal podrá ser de carácter económico o no, es decir, que se admitirán prestaciones tanto de carácter material como inmaterial¹⁰⁰, por tanto, a modo de ejemplo, la dádiva puede ser una cantidad de dinero o una serie de favores que coloque en una mejor situación al que la recibe.

⁹⁴ LUZÓN PEÑA, Lecciones, 2016, 3ª ed., pp.155-156.

⁹⁵ PÉREZ FERRER, en Morillas Cuevas (Dir.), Respuestas jurídicas, 2017, p. 75.

⁹⁶ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, pp. 118-119.

⁹⁷ ENCINAR DEL POZO, Delito de corrupción privada, 2016, p. 319.

⁹⁸ PÉREZ FERRER, en Morillas Cuevas (Dir.), Respuestas jurídicas, 2017, p. 76.

⁹⁹ ENCINAR DEL POZO, Delito de corrupción privada, 2016, p. 323.

¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 320.

Por último, y al hilo de lo expuesto en el párrafo anterior, hay que tener en cuenta que dicho valor del beneficio o ventaja debe ser de una cuantía suficiente, pues de no serlo se estaría ante el tipo atenuado regulado en el artículo 286 bis. 3 CP¹⁰¹.

Realizadas estas consideraciones previas, se procederá a analizar las diferentes conductas que se van a dar en cada modalidad de corrupción.

- Conducta típica en la corrupción activa.

La conducta típica de la modalidad activa de corrupción viene derivada del artículo 286 bis. 2 CP, y consistirá en prometer, ofrecer o conceder un beneficio o ventaja no justificado, para que se produzca una adulteración en el resultado del evento deportivo¹⁰².

Por tanto, se observa que, en este tipo de corrupción, la conducta girará en torno a acciones como: prometer, ofrecer o conceder, por lo que es preciso examinar estos verbos¹⁰³ típicos.

Prometer. Esta acción significa que la persona se obliga a hacer, decir o dar algo. En el caso que nos ocupa, se entiende que el sujeto corruptor se compromete a entregar el beneficio o ventaja indebido al corrompido, para que este último realice alguna acción u omisión encaminada a predeterminar o adulterar el resultado del evento deportivo¹⁰⁴, es decir, contraer un compromiso para incentivar el logro de tales fines. Además, en estos casos la entrega de dicha promesa, normalmente, se hará de forma posterior al evento que se quiera manipular.

Ofrecer. Aunque esta acción guarda muchas similitudes con la anterior, el legislador lo ha planteado de forma alternativa, con la intención de poder llegar a un espectro más amplio en estas acciones. Por ello, tomando como referencia la RAE, se entiende que el ofrecimiento consistirá en decir o exponer qué cantidad se está dispuesto a pagar por algo. Y, en vinculación con la corrupción en el deporte, esta oferta se daría en los casos en que la dádiva no pueda darse al momento, es decir, que se expone lo que

¹⁰¹ Este tipo atenuado en la corrupción en el deporte se dará atendiendo a la cuantía del beneficio o ventaja y a la trascendencia que tenga el sujeto culpable en la conducta típica.

¹⁰² PÉREZ FERRER, en Morillas Cuevas (Dir.), Respuestas jurídicas, 2017, p. 77.

¹⁰³ La primera definición que se dará de estos verbos se ha obtenido del diccionario de la Real Academia Española.

¹⁰⁴ PÉREZ FERRER, en Morillas Cuevas (Dir.), Respuestas jurídicas, 2017, p. 77.

se va a dar, pero se recibirá en un momento ulterior¹⁰⁵; al igual que ocurre en la promesa, este normalmente se dará cuando ya haya finalizado el evento deportivo, cuando se produzca la adulteración o manipulación del resultado.

Conceder. Esta última acción consiste esencialmente en hacer entrega efectiva de la dádiva, la cual puede provenir tanto de la promesa u ofrecimiento que se realizó anteriormente como en un acontecimiento espontáneo surgido conjuntamente en el pacto por alguna de estas dos vías¹⁰⁶. Por tanto, la concesión de esta dádiva puede provenir de esa promesa u ofrecimiento que se hizo en un momento anterior, y que por ello se hace efectiva cuando ya se ha producido el evento adulterado; o puede ocurrir que antes de que se produzca tal evento, el sujeto corruptor le haga la entrega para asegurarse de que se consigue la adulteración pretendida. Pero, en todo caso, se debe entender como la efectiva entrega de la dádiva.

Sobre estas conductas típicas de la modalidad activa es preciso hacer unas últimas aclaraciones. En primer lugar, la promesa, ofrecimiento o concesión deberán hacerse a los sujetos enumerados en el artículo 286 bis. 4 CP, al ser los que pueden provocar la predeterminación o adulteración del evento deportivo. Por otro lado, en las acciones de prometer u ofrecer, no es necesario para su consumación que sean aceptadas por el destinatario, aunque sí se reconoce que es preciso que al menos lleguen a su conocimiento. Además, en estos casos tampoco sería necesario que se haga la efectiva entrega del beneficio o ventaja. En cambio, en la concesión se considera que con la simple aceptación se tiene por consumada la acción, aunque no se haya hecho efectiva la entrega del beneficio o ventaja. Por último, para la consumación de tal conducta no es necesario que la finalidad perseguida se haya realizado, es decir, no hace falta que se llegue a producir la adulteración del encuentro deportivo¹⁰⁷. Todo ello, plantea problemas evidentes de prueba en el momento de demostrar que se ha cometido tal tipo penal, algo que se examinará más adelante.

¹⁰⁵ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, p. 126.

¹⁰⁶ *Ibid.*, p. 128.

¹⁰⁷ PÉREZ FERRER, en Morillas Cuevas (Dir.), Respuestas jurídicas, 2017, p. 77.

- Conducta típica en la corrupción pasiva.

En la modalidad pasiva de corrupción la conducta típica se deriva del artículo 286 bis. 1 CP, y en este caso consistirá en recibir, solicitar o aceptar el beneficio o ventaja sin justificación, para que los sujetos realicen una manipulación del resultado del encuentro deportivo.

En esta modalidad de corrupción, nos encontramos con otras acciones diferentes a las de la modalidad activa, y que también es necesario analizar, que son las siguientes: recibir, solicitar o aceptar¹⁰⁸.

Recibir. En sentido estricto, esta acción significaría que el sobornado incorpora a su patrimonio el objeto con valor económico o de otra naturaleza que sería su contraprestación o paga por su intervención en el pacto¹⁰⁹. Es decir, que a uno de los sujetos enumerados en la norma se le hace la efectiva entrega del beneficio o ventaja no justificado, asumiéndose por ello su condición de sujeto activo de la acción penal.

Solicitar. Esta acción consiste en pedir y manifestar que se quiere o se desea alguna cosa, o aplicado al ámbito que nos ocupa, sería la declaración de voluntad de uno de los sujetos mencionados en el precepto, manifestando su predisposición a recibir un beneficio o ventaja no justificados¹¹⁰. En este punto, se puede aludir a que nos encontramos en el único caso en que los sujetos mencionados en el artículo 286 bis. 4 CP son los que ponen en marcha o toman la iniciativa del pacto, es decir, son los que inician la conducta corrupta. Pues son estos sujetos los que demandan el beneficio o ventaja no justificado, para la realización o abstención de alguna acción que conlleve la predeterminación o adulteración del evento deportivo¹¹¹.

Aceptar. Esta acción significa aprobar o dar por bueno, en el sentido de que se llega a un acuerdo con el sujeto que promete u ofrece el beneficio o ventaja injustificados. En estos casos, puede ocurrir que la iniciativa parta del sujeto que prometa u ofrezca, pero también puede ocurrir que surja de un acuerdo entre ambas partes, por lo que la iniciativa corruptora sería compartida¹¹². Además, en estas acciones típicas, CORTÉS BERCHIARELLI

¹⁰⁸ En similitud con los verbos típicos de la modalidad activa, estos también se han obtenido de la RAE.

¹⁰⁹ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, p. 135.

¹¹⁰ PÉREZ FERRER, en Morillas Cuevas (Dir.), Respuestas jurídicas, 2017, p. 78.

¹¹¹ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, p. 136.

¹¹² PÉREZ FERRER, en Morillas Cuevas (Dir.), Respuestas jurídicas, 2017, p. 78.

manifiesta que “*se acepta aquello que, por diferentes razones, no se puede recibir en el momento en el que se sella el pacto prohibido*”¹¹³, realizando así una diferenciación entre estas dos conductas típicas de la modalidad pasiva de corrupción deportiva.

Por último, al igual que ocurre en la modalidad activa, en estas acciones tampoco se requiere la efectiva entrega del beneficio o ventaja no justificado para la consumación de la acción penal, exceptuando el caso de la recepción, en el que se entiende por realizada la entrega efectiva del beneficio o ventaja. Pero en ninguna de estas conductas es necesario que se lleve a cabo la correcta adulteración del evento deportivo para la consumación del mismo.

c) Las primas en el deporte como posible conducta típica.

Uno de los puntos interesantes en lo relativo a la conducta típica se encuentra en el tema de las “primas”, es decir, los alicientes que se ofrecen a los deportistas, generalmente de carácter económico, para que consigan los resultados previstos por la entidad deportiva o para que se ganen los campeonatos. En este punto es conveniente hacer una serie de distinciones en torno a estas primas. En primer lugar, hay que distinguir entre las primas que son ofrecidas por la propia entidad del deportista de las que son ofrecidas por un tercero¹¹⁴ ajeno a dicho deportista. Y, dentro de las primas que ofrece ese tercero ajeno, también habría que distinguir si son primas por ganar o si lo son por cosa diferente a ganar, esto es, por empatar o perder.

Las primas ofrecidas a los deportistas por su propia entidad deportiva por ganar o conseguir los objetivos marcados a principio de temporada no traen debate ni tienen relevancia en el marco penal, esto es, que no presentan ningún problema respecto a su legalidad¹¹⁵. Pues, como ocurre en el mundo del fútbol, por ejemplo, estas primas suelen tener carácter público y son fijadas entre el propio club y los futbolistas, teniendo la consideración de plus extrasalarial o comisión por objetivos.

¹¹³ CORTÉS BECHIARRELI, Corrupción deportiva, 2012, p. 139.

¹¹⁴ Es conveniente aclarar, en lo relativo a este tercero, que puede ser un tercer club o entidad interesados en el resultado de la prueba o encuentro en donde participa el deportista o los deportistas.

¹¹⁵ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, pp. 132-133.

Por tanto, en el marco de las primas, el interés penal se puede encontrar en torno a las que son ofrecidas por un tercero ajeno al deportista, ya sean para ganar, para perder (o dejarse ganar) o empatar, o para una conducta distinta a la de dejarse ganar, las cuales se procederán a examinar a continuación:

- Primas por ganar ofrecidas al deportista por un tercero.

Este tipo de primas son las que han generado mayor debate, en el contexto de si pueden enmarcarse dentro de la conducta típica del delito o si, por lo contrario, deben de considerarse atípicas. A modo de ejemplo, estas primas se podrían dar en deportes como el fútbol, cuando al final de la temporada hay dos equipos que se juegan la permanencia en la categoría, y uno de ellos necesita que el otro equipo pierda para poder mantenerla. Ante tal situación, ese primer equipo que se juega la permanencia con el segundo equipo decide incentivar a un tercer equipo, que se va a enfrentar al segundo, para que este tercer equipo le gane, y así poder mantener la categoría.

En primer momento, y antes de la reforma penal del 2015, la doctrina mayoritaria se inclinaba por la atipicidad de estas primas con base en que no se está produciendo un “incumplimiento obligacional” que exigían el 286 bis. 1 y 2. Pues, en este ámbito, los deportistas tienen como obligación el respeto por las normas del juego, así como el intentar vencer en cada prueba o encuentro que disputen¹¹⁶. Por tanto, aunque dichos deportistas reciban un incentivo para ganar, por parte de un tercero, no estarían incumpliendo ninguna de sus obligaciones, ya que de todos modos tienen como deber el “salir a ganar”, lo que hace considerar a este tipo de primas como atípicas en la corrupción en el deporte.

Esta argumentación pierde peso tras la reforma del 2015, al verse suprimida esa exigencia del “incumplimiento obligacional”. Tras lo cual, se opta por observar el “*carácter fraudulento de la pretensión o el carácter indebido del beneficio o ventaja*” que trae consigo este tipo de primas, para saber si entran dentro del tipo o no. En este aspecto GILI PASCUAL expone que estas primas por ganar “*no alteran significativamente el grado de indeterminación que caracteriza a todo evento deportivo. Dicho de otro modo: es mucho más seguro que se alterará el resultado —se predeterminará— si lo que debe hacer el sobornado es dejarse ganar, que si lo que se pretende es que se esfuerce al*

¹¹⁶ *Ibid.*, p. 133.

máximo por conseguir la victoria; así, mientras que lo primero (los pagos por dejarse ganar) alteraría de forma significativa el grado de indeterminación que debe presidir la competición, las primas por ganar carecerían de suficiente aptitud en ese cometido, por lo que deberían reputarse atípicas”¹¹⁷.

En conclusión, al hilo de la argumentación expuesta, la opinión de la doctrina mayoritaria, a la que me adhiero, es considerar la atipicidad de estas primas por terceros para ganar. Aunque este tipo de primas crean debate o puedan estar “mal vistas” desde un ámbito social, no pueden entenderse como típicas cuando con ellas no se consigue una alteración o predeterminación fraudulenta del resultado, es decir, que no se pueden comparar los efectos que surgen cuando se está ante una prima por dejarse ganar, con los que lo hacen cuando se trata de una prima por ganar. Y ello debido a que, en el segundo de los casos, sólo se está dando un aliciente al deportista, que no se juega nada deportivamente, para que salga a competir y a intentar ganar el encuentro, cosa que podría ocurrir aunque no existiera tal incentivo. Por ello, y atendiendo sobre todo al principio de intervención mínima del Derecho penal, este tipo de primas no deberían ser castigadas penalmente. En todo caso, se debería remitir a la legislación deportivo-administrativa para que se encargue de su control, que a día de hoy no lo regula. Ello nos da otro argumento a favor de su exclusión como conducta típica, como ha expuesto CORTÉS BECHIARELLI¹¹⁸, al establecer que, si este tipo de primas no están sancionadas en la legislación deportiva, no se puede pretender que su primera sanción venga del Derecho penal, como si fuera un escarmiento preventivo para que no se dé este tipo de primas por ganar.

- Primas ofrecidas por un tercero por conductas distintas a dejarse ganar.

En relación con la exclusión del tipo de las primas por ganar, AGUILAR ROMO¹¹⁹ opina que no todas deben ser excluidas del delito de corrupción en el deporte. Esto hace referencia a otro tipo de conductas que, sin llegar a consistir en dejarse ganar, también implican una manipulación de carácter fraudulento del resultado de la prueba o competición. Más aún si se considera que en el concepto de resultado se incluye el

¹¹⁷ GILI PASCUAL, RDPC, 8, 2012, pp. 59-60.

¹¹⁸ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, p. 166.

¹¹⁹ AGUILAR ROMO, RADPP, 54, 2019, pp. 15-16.

“tanteo”¹²⁰, debido a que existen competiciones deportivas en donde no sólo cuenta el ganar, empatar o perder, sino que para el propio transcurso de la competición se tiene en cuenta el tanteo final del partido o prueba. Un ejemplo claro de ello se encuentra en el conocido “golaveraje” (diferencia de goles) del fútbol: cuando varios equipos empatan a puntos en la clasificación final de la competición, esta se decide por la diferencia de goles, es decir, si se encuentran empatados a puntos en la clasificación, se decidirá quién queda por encima en la misma por la mayor diferencia de goles.

Por tanto, aquí nos podemos encontrar con primas ofrecidas a los deportistas para que su equipo no marque más de un número determinado de goles o para que, aun ganando su equipo, se dejen encajar algún gol. Pero estas sólo podrán entrar dentro del marco del Derecho Penal cuando esa adulteración del resultado tenga incidencia en el resultado final de la competición, es decir, que por esos goles cambie el sentido de la clasificación, favoreciendo al que ha abonado esa prima y perjudicando a otro club, que nada ha tenido que ver o que no sabía nada al respecto.

Además, AGUILAR ROMO trae a colación con este tipo de primas a las casas de apuestas, en las cuales se puede apostar por muy diferentes aspectos del evento deportivo, por lo que considera que pueden existir *“conductas que, sin consistir necesariamente en dejarse perder o empatar, puedan atentar a la integridad deportiva al tiempo que se favorecen intereses económicos espurios ajenos a los naturalmente derivados de la propia actividad deportiva y que pueden alterar el resultado final de la competición”*¹²¹.

En conclusión, este tipo de conductas en las que se pactan condiciones específicas del juego que no dependen de ganar o dejarse perder, sino que se acuerdan para no ganar todo lo posible o que se realice en determinadas condiciones¹²², deben reputarse típicas del delito de la corrupción deportiva.

- Primas ofrecidas al deportista por perder o empatar.

Menos debate encontramos ante las primas ofrecidas por un tercero ajeno al deportista con el fin de que no gane, esto es, se pretende que el deportista empate o pierda el encuentro o prueba. Por ello, obviamente, con este tipo de primas se estaría realizando

¹²⁰ Esto hace referencia por ejemplo a los goles en una competición de fútbol que pueden marcar la diferencia en la clasificación, o del mismo modo los puntos de baloncesto o los sets en los partidos de tenis.

¹²¹ AGUILAR ROMO, RADPP, 54, 2019, p. 16.

¹²² *Ibid.*, p. 16.

la conducta típica del tipo penal, en el sentido de que con ese incentivo se está pretendiendo alterar de forma deliberada y fraudulenta el resultado del evento deportivo¹²³, y, por ende, estas primas adquieren relevancia penal a tenor de lo previsto en el delito de la corrupción en el deporte.

C. EL TIPO SUBJETIVO.

En lo que respecta al tipo subjetivo del delito, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de aspectos objetivos de la corrupción deportiva, hay una opinión prácticamente unánime entre los autores. Este tipo penal se concibe específicamente como de comisión dolosa, es decir, se excluye la comisión imprudente al no estar contemplada en el propio CP, en virtud del artículo 12 CP¹²⁴; tampoco suele haber problemas relacionados con la comisión por error (que, de ser de tipo, daría lugar a la comisión imprudente –impune- o al caso fortuito), por resultar inverosímil en este tipo de materia, como expone CORTÉS BECHIARELLI¹²⁵.

Por tanto, en el tipo subjetivo sólo se podrá contemplar el dolo como forma de comisión, en el sentido de que *“la corrupción, en sí misma, cualquiera que sea la parcela social en la que se desenvuelva, exige el conocimiento y voluntad dirigida a desviar la posición de poder del sujeto de referencia”*¹²⁶. Y, más aún, se refuerza el carácter doloso en este ámbito cuando la propia norma de la corrupción en el deporte expone que esta acción deberá ser “deliberada y fraudulenta”.

Además, es conveniente tratar sobre la finalidad para cual se realiza la conducta típica. Esta finalidad es la de *“predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva”*. Con esto se entiende que las conductas que se realicen, tanto en la modalidad activa como en la pasiva, tienen que ir encaminadas a que se produzca una adulteración del resultado del evento deportivo, es decir, ese soborno que se produce es para predeterminar o adulterar la competición (sin ser necesario para la consumación que se haya producido la efectiva

¹²³ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, p. 165.

¹²⁴ Artículo 12 CP: *“Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley”*.

¹²⁵ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, pp. 167-168.

¹²⁶ BENÍTEZ ORTÚZAR, Delito de “Fraudes deportivos”, 2011, p. 174.

adulteración del resultado, lo que convierte a este tipo en uno de consumación anticipada). Por tanto, este término de “finalidad” establecido en la norma penal resalta el aspecto tendencial específico que debe tener el comportamiento del sujeto activo¹²⁷. En este aspecto, además, hay autores como SÁNCHEZ BERNAL, que consideran que esta adulteración del resultado sería, desde el punto de vista del delito de corrupción entre particulares, la especificación del favorecimiento de lo indebido¹²⁸, que se castiga en este tipo penal de la corrupción en el deporte.

En definitiva, junto al dolo debe concurrir este elemento subjetivo adicional para la consumación del delito¹²⁹. La presencia de este elemento parece poco compatible con el dolo eventual, que como exponen varios autores¹³⁰, no sería punible en este tipo penal.

¹²⁷ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, p. 125.

¹²⁸ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, p. 127.

¹²⁹ ANARTE BORRALLA/ROMERO SÁNCHEZ, REPC, 14-20, 2012, p. 24.

¹³⁰ Véase SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, pp. 150-151; y CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, pp. 161-165.

V. LA ANTIJURICIDAD, LA CULPABILIDAD Y LA PENALIDAD Y PERSEGUIBILIDAD EN LA CORRUPCIÓN DEPORTIVA.

A. LA ANTIJURICIDAD.

La antijuridicidad en sentido formal es concebida como la contrariedad de la conducta típica con el Derecho, es decir, la acción tendrá el carácter de antijurídica cuando sea contraria a las normas jurídicas, en el sentido de que está prohibida por estas. Desde una concepción material, la antijuridicidad será la lesión o puesta en peligro reprochable y grave de un bien jurídico tutelado en concreto y del propio Derecho¹³¹.

En este sentido, las normas contienen mandatos, prohibiciones y autorizaciones, por lo que la antijuridicidad permitirá saber si para cada caso en concreto puede existir o no una causa de justificación¹³².

Es conveniente plantearse si pueden existir causas de justificación en el delito de corrupción en el deporte, aunque tratándose de una norma penal tan reciente, no se ha ahondado mucho sobre este tema, y la escasa jurisprudencia al respecto dificulta más el análisis, por lo que en mayor medida se remitirá en este trabajo a lo establecido para los delitos de corrupción privada.

En primer lugar, ENCINAR DEL POZO¹³³ excluye desde un principio, para el delito de corrupción en los negocios, la legítima defensa y el obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Por ello, en la corrupción deportiva estas causas de justificación tampoco serían aplicables, pues no se puede justificar un soborno como parte del deber o ejercicio de las funciones de una profesión o cargo; ni, tampoco, que pueda ser la respuesta defensiva frente a una agresión ilegítima.

Por otro lado, se contemplan para la corrupción privada causas de justificación como el consentimiento del titular del bien jurídico y la del estado de necesidad.

En la corrupción deportiva, no sería viable la primera causa de justificación, pues son numerosos los sujetos titulares del bien jurídico protegido, y es imposible concebir que todos ellos presten su consentimiento para que se lleve a cabo un soborno con el fin

¹³¹ LUZÓN PEÑA, Lecciones, 3ªed., 2016, 13/4.

¹³² Las causas de justificación se encuentran reguladas y numeradas en el artículo 20 CP.

¹³³ ENCINAR DEL POZO, Delito de corrupción privada, 2016, p. 373.

de que se produzca la adulteración o predeterminación del resultado de un evento deportivo.

Más dudas puede plantear la cuestión del estado de necesidad, porque puede darse la siguiente hipótesis: ante la situación crítica de una entidad deportiva, esta decide realizar un soborno para evitar la desaparición del club, en el sentido de que, si el club no desciende de categoría, éste mantendría unos ingresos suficientes para no desaparecer¹³⁴. En el ejemplo enunciado se puede plantear la posibilidad de una situación de estado de necesidad, en la que habría que examinar al detalle cada caso en concreto atendiendo a los elementos esenciales (situación de necesidad y la acción salvadora) e inesenciales (necesidad en concreto del medio empleado y subsidiariedad, proporcionalidad, falta de provocación intencional y falta de obligación de sacrificio) de esta causa de justificación¹³⁵. En este caso, observando los elementos de esta causa de justificación, es muy poco probable que se llegue a contemplar el estado de necesidad en la corrupción deportiva como eximente completa e incluso incompleta.

Por un lado, en el elemento de la proporcionalidad, es muy probable que el daño que se produce con el soborno para salvar a una entidad deportiva sea mucho mayor al que se pretende evitar, y más teniendo en cuenta los numerosos titulares del bien jurídico e intereses de terceros que se pueden ver afectados, como por ejemplo otras entidades deportivas en la misma situación a las que se puede poner adicionalmente en peligro. Por ello, de ningún modo se llegaría a cumplir el requisito de proporcionalidad y, por ende, tampoco se daría en ningún caso una eximente completa de este tipo. Por otro lado, en lo que respecta a la situación de necesidad, se requiere que el mal que se pretende evitar sea real, grave y se trate de un peligro a futuro que haga precisa ya la intervención (requisito esencial), además de que se hayan agotado todas las demás vías salvadoras alternativas idóneas y menos gravosas (requisito cuyo carácter esencial o inesencial es discutido por la doctrina y la jurisprudencia)¹³⁶. Ante lo cual es cuestionable que la situación económica pueda cualificar como situación de necesidad y, aun en ese caso, es muy difícil pensar que una entidad deportiva haya acudido a todas las demás vías lícitas para salvar la situación, debido a la cantidad de inversores que existen a día de hoy en el ámbito del

¹³⁴ En similitud al ejemplo planteado por ENCINAR DEL POZO, para el estado de necesidad en la corrupción privada. *Ibid.*, p. 374.

¹³⁵ LUZÓN PEÑA, Lecciones, 3ª ed., 2016, 24/11.

¹³⁶ Para una mejor comprensión del estado de necesidad, véase LUZÓN PEÑA, Lecciones, 3ª ed., 2016, 24/1-51, que se decanta por considerar la subsidiariedad como un requisito inesencial.

deporte, que pueden paliar la situación crítica de tal entidad deportiva. Por tanto, es difícil pensar que esta causa de justificación se pueda dar ni aun de forma incompleta.

En conclusión, aunque es necesario que para cada caso en concreto se analice si es posible o no la aplicación de una causa de justificación para estas conductas típicas, en mi opinión y, desde un punto de vista general, no serían viables para los delitos de corrupción en el deporte, debido al improbable planteamiento de que se den los presupuestos objetivos de las mismas en un delito de tanta singularidad.

B. LA CULPABILIDAD.

En el delito de la corrupción en el deporte, el ámbito de la culpabilidad no presenta prácticamente ninguna duda acerca de su planteamiento, en el sentido de que los elementos como la imputabilidad y la exigibilidad de otra conducta, quedan suficientemente claros en este tipo delictivo, por lo que no haría falta ahondar sobre tales cuestiones.

En referencia al delito de corrupción privada, ENCINAR DEL POZO¹³⁷ se plantea la cuestión de si en tal acción cabría el error de prohibición, esto es, si no se está al corriente de que la acción que se va a cometer es ilícita, en el sentido de que está prohibida por la norma. En lo que respecta a la corrupción deportiva, este planteamiento tampoco debe plantear muchas dudas, pues si bien es cierto que el Derecho Penal, hasta hace poco, no regulaba este tipo de acciones, estas sí estaban reguladas y prohibidas por el ordenamiento jurídico, más concretamente por la Ley del Deporte¹³⁸. Por tanto, resulta difícil plantearse que las personas que están cometiendo un soborno de este tipo no sean conscientes de que tal conducta no está sancionada y prohibida por la Ley; y, por ende, en mi opinión, la probabilidad de alegar el error de prohibición en este delito resultaría poco probable, aunque pueden existir algunos casos dudosos en que los autores puedan incurrir en tal error.

¹³⁷ ENCINAR DEL POZO, Delito de corrupción privada, 2016, pp. 377-380.

¹³⁸ Este tipo de acciones se encuentran reguladas y prohibidas en el artículo 76.1. c de la LD, a cuyo tenor: “Se considerarán, en todo caso, como infracciones muy graves a las reglas de juego o competición o a las normas deportivas generales, las siguientes:

c) Las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición”.

En relación a ello, también se podría mencionar el error de prohibición penal¹³⁹, que se da cuando el sujeto sabe que la acción que está cometiendo es ilícita, pero desconoce la gravedad de ésta y que es punible penalmente. En este caso, sí es cierto que esta conducta sólo se encuentra penada desde su entrada en vigor en el año 2010, pero ha tenido un gran repercusión, pues desde entonces se han dado casos de presuntos delitos de corrupción en el deporte, lo que ha aumentado su relevancia social. Todo esto hace difícil pensar que haya personas que a día de hoy realicen dicha conducta típica y no conozcan su gravedad, por lo que, en mi opinión, tampoco será frecuente el error de prohibición penal.

C. LA PENALIDAD Y LA PERSEGUIBILIDAD.

1. Penalidad.

En virtud de la cláusula de remisión que se ha visto anteriormente, las penas para el delito de corrupción en el deporte serán las mismas que para el delito de corrupción entre particulares, es decir, que no se fija un castigo en particular para la corrupción deportiva. Por ello, los que realicen la conducta típica serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

Es conveniente realizar algunas consideraciones respecto de estas penas. En primer lugar, la pena de prisión que se impone de seis meses a cuatro años, por un lado, no respeta el mínimo fijado en la Decisión Marco 2003/568/JAI y, por otro lado, excede de la duración máxima allí prevista¹⁴⁰, lo que ha sido criticado duramente por la doctrina, al considerarlo como una medida demasiado severa y desproporcionada¹⁴¹.

En segundo lugar, en la pena de multa se ha utilizado un sistema proporcional al valor del beneficio o ventaja, esto es, del tanto al triplo de ese valor obtenido, lo que resulta un elemento disuasorio y eficaz para los delitos económicos, pero que en este

¹³⁹ LUZÓN PEÑA, Lecciones, 3ªed., 2016, 17/50.

¹⁴⁰ Esta normativa europea fija la pena de prisión de uno a tres años, a tenor de su artículo 4.2: “*Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para asegurar que los actos mencionados en el artículo 2 sean punibles con sanciones privativas de libertad de una duración máxima de al menos de uno a tres años*”.

¹⁴¹ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, p. 153.

delito ha traído consigo cierto debate, pues puede ocurrir que el beneficio o ventaja que se obtenga no pueda ser valorado de manera económica, lo que dificultaría la fijación de la cantidad de la multa¹⁴².

En lo que respecta a la pena de inhabilitación, al provenir del delito de corrupción privada se fija para la industria o comercio. En aplicación al ámbito deportivo, debería imponerse la inhabilitación para las funciones que se desarrollan dentro de una entidad deportiva o para participar en las competiciones deportivas respecto de los deportistas y árbitros o jueces. Sin embargo, como afirma BENÍTEZ ORTUZAR¹⁴³, esto podría plantear problemas de legalidad penal, pues dichas inhabilitaciones no están recogidas expresamente en el tipo; por ello, de momento, la inhabilitación en el sentido propuesto debe corresponder a la potestad sancionadora deportiva y no a la penal.

En último lugar, cabe realizar una breve mención tanto al delito agravado como al delito atenuado específico en el marco de la corrupción en el deporte. En el delito agravado las penas serán impuestas en su mitad superior o incluso superior en grado¹⁴⁴. Tal agravamiento se dará cuando se busque con esa acción influir en los juegos de azar o apuestas, para obtener un beneficio de éstas, o cuando se trate de una competición deportiva profesional o de una competición de carácter internacional, como se ha mencionado anteriormente. En cambio, en la modalidad atenuada, que se dará cuando la cuantía del beneficio o ventaja sea de gran relevancia o cuando la trascendencia de las funciones del culpable sea mínima. En estos casos, las penas se impondrán en su grado inferior y la multa será reducida al arbitrio de los jueces o tribunales, como se recoge en el artículo 286 *bis*. 3 CP¹⁴⁵.

¹⁴² *Ibid.*, p. 154.

¹⁴³ BENÍTEZ ORTUZAR, Delito de “Fraudes deportivos”, 2011, pp. 175-176.

¹⁴⁴ Artículo 286^{quater} CP: “Si los hechos a que se refieren los artículos de esta Sección resultaran de especial gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado”.

¹⁴⁵ Artículo 286^{bis}. 3 CP: “Los jueces y tribunales, en atención a la cuantía del beneficio o al valor de la ventaja, y a la trascendencia de las funciones del culpable, podrán imponer la pena inferior en grado y reducir la de multa a su prudente arbitrio”.

2. Perseguibilidad.

Para perseguir el delito de corrupción deportiva, al no encontrarse incluido dentro de los delitos enunciados en el artículo 287 CP¹⁴⁶, no será necesaria la existencia de una denuncia previa, pues se trata de un delito de carácter público y por tanto es perseguible de oficio.

¹⁴⁶ Artículo 287 CP: “Para proceder por los delitos previstos en la Sección 3ª de este Capítulo, excepto los previstos en los artículos 284 y 285, será necesaria denuncia de la persona agraviada o de sus representantes legales. Cuando aquella sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal”.

VI. *ITER CRIMINIS*. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN. POSIBLES RELACIONES CONCURSALES.

A. *ITER CRIMINIS*.

El delito de corrupción en el deporte, como se ha mencionado a lo largo del trabajo, es un delito de mera actividad y de consumación anticipada. Esto significa que no hace falta que se logre la finalidad perseguida, sino que el delito estará consumado desde que se realiza alguna de las conductas típicas, sin que se haya producido la correcta predeterminación o alteración del resultado del encuentro, prueba o competición deportiva (lo que constituiría, de darse, el *agotamiento* del delito); también se puede haber consumado el delito aunque no se haya realizado el intercambio del beneficio o ventaja ofrecidos, prometidos, aceptados o solicitados.

- Modalidad activa.

En las acciones de prometer u ofrecer, no es necesario que éstas hayan sido aceptadas por el destinatario, bastando sólo para su consumación que dicha promesa u oferta llegue a su conocimiento. En cambio, y aunque en la concesión no será preciso que el soborno se materialice concretamente en la entrega del beneficio o ventaja injustificados, sí es necesario que en dicha acción se haya producido una aceptación en firme por parte del destinatario¹⁴⁷.

- Modalidad pasiva.

En la conducta de solicitar, esta se entenderá consumada cuando dicha solicitud llegue a conocimiento del receptor, es decir, no se exige que se llegue a un acuerdo entre las partes para su consumación. En la aceptación tampoco será preciso que se realice la entrega de la dádiva o ventaja mientras que, en lo que respecta a la recepción del beneficio, deberá haberse producido la entrega del beneficio o ventaja¹⁴⁸. Dicho esto, nótese que, en la medida en que ya se haya realizado cualquiera de las conductas típicas anteriores con la finalidad indicada, el tipo penal como tal ya habrá quedado perfeccionado o consumado.

¹⁴⁷ ANARTE BORRALLA/ROMERO SÁNCHEZ, RECPC, 14-20, 2012, p. 37.

¹⁴⁸ *Ibid.*, p. 36.

En definitiva, el legislador, al establecer la corrupción deportiva como un delito de consumación anticipada, hace que se castiguen todas las acciones encaminadas a predeterminar o adulterar el resultado de un evento deportivo, aunque dicha finalidad no se haya logrado o ni siquiera se haya llegado a realizar la entrega del beneficio o ventaja no justificado. Con esto se busca dar una mayor protección, anticipada, al bien jurídico, así como ser una herramienta de persuasión para que tales conductas no se cometan. Pero ello trae consigo problemas en el marco procesal, pues al tratarse de un delito de las características señaladas, en el que no es preciso que se reciba el beneficio o ventaja ni que se produzca la adulteración del resultado, ello afecta gravemente al marco probatorio. Y esto porque, en algunas ocasiones en donde se realicen tales conductas, no existirán pruebas de su comisión, es decir, al bastar con actos de mera palabra, de los que normalmente no suele quedar constancia, será difícil desmontar la presunción de inocencia, a tenor del principio *in dubio pro reo*. De ahí que sea más sencillo probar aquellas conductas típicas que sí dejan más huella, como las que tienen que ver con la recepción de la ventaja o dádiva, como ocurre en este tipo de delitos. Sin embargo, también será difícil demostrar que se ha cometido la conducta típica aun cuando se haya realizado la entrega de la dádiva, lo que dificulta gravemente la intervención punitiva del DP.

En estos casos de corrupción en el deporte, lo más posible es que los conocedores de dicha conducta típica sean sólo los que han participado en ella, es decir, que los titulares del bien jurídico protegido no tengan conocimiento de lo pactado entre los corruptores y los corrompidos. Por tanto, a pesar de que el delito se haya consumado, puede ocurrir que esto no se acabe demostrando y, por ende, no sea castigado. Prueba de ello es la escasa jurisprudencia que hay relativa al delito de corrupción en el deporte.

Por último, en lo relativo al *iter criminis* de este delito, es conveniente analizar si caben o no las formas imperfectas de ejecución de las conductas típicas. En este sentido, al tratarse de un delito de consumación anticipada, en donde se entiende que el delito estará consumado con la simple promesa, oferta, etc., sin ser necesario que la otra parte lo haya aceptado (bastando con que haya tenido conocimiento de la misma), hace difícil apreciar que la acción se pueda ejecutar de forma imperfecta. Sin embargo, tratándose de

un delito cortado de resultado¹⁴⁹, queda abierta la posibilidad de que se dé la ejecución del mismo en grado de tentativa.

En relación a ello, SÁNCHEZ BERNAL¹⁵⁰ plantea la posibilidad de un caso de tentativa inidónea. Éste se daría cuando se intenta corromper a un sujeto para que predetermine o altere el evento deportivo, pero éste no tiene la capacidad de hacerlo. Este supuesto se daría en la modalidad activa de corrupción, en la que se prometería, ofrecería o concedería el beneficio o ventaja no justificado a personas de las indicadas en el tipo, pero que no tienen la capacidad de llevar a cabo la finalidad de adulterar el evento deportivo; por ello, aunque se den todos los demás aspectos típicos del delito, de ningún modo se estaría ante una conducta adecuada de entrada para producir la alteración del encuentro deportivo. Pero dicha tentativa inidónea sólo sería punible cuando *“el corruptor, ex ante, hubiera podido pensar que el corrupto sí ostentaba dicha capacidad”*¹⁵¹ porque, con carácter más general, había peligrosidad objetiva ex ante. Por ello, este tipo de tentativa sólo sería punible cuando antes de llevarse a cabo parezcan peligrosas para afectar el bien jurídico, es decir, *“la tentativa inidónea es peligrosa ex ante en la medida en que, para el espectador objetivo situado en el lugar del autor, hubiera parecido capaz de consumir el delito”*¹⁵².

Por último, cabe hacer mención que como ocurre en el delito de corrupción entre particulares, en el delito de corrupción en el deporte no se contempla el castigo de los actos preparatorios¹⁵³, al entenderse ya tipificados en el mismo desde una perspectiva material.

B. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN.

La corrupción en el deporte es, por lo general, y como se ha avanzado, un delito bilateral o de encuentro, en donde hay un sujeto corruptor y otro sujeto que es corrompido.

¹⁴⁹ LUZÓN PEÑA, Lecciones, 3ª ed., 2016, 12/34.

¹⁵⁰ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, pp. 160-161.

¹⁵¹ *Ibid.*, p. 161.

¹⁵² MIR PUIG, Derecho Penal, 10ª ed., 2015, 13/83.

¹⁵³ ANARTE BORRALLA/ROMERO SÁNCHEZ, RECPC, 14-20, 2012, p. 37.

Sin embargo, hay que matizar que también puede darse de forma unilateral, en el sentido de que puede consumarse sin que llegue a existir un sujeto efectivamente corrompido¹⁵⁴.

Ante esto, no cabe duda sobre la intervención de los sujetos activos en la conducta típica, los cuales ya fueron analizados anteriormente: tanto los sujetos corruptores como los sujetos corrompidos podrán ser castigados como autores del delito de corrupción en el deporte en sus respectivas modalidades¹⁵⁵, cuando realizan por sí mismos las conductas típicas (teoría objetivo-formal de la autoría).

En este punto es preciso mencionar que pueden existir otros sujetos que intervienen en este delito, como pueden ser, entre otros, los cooperadores, las personas que incentivan a los directivos o deportistas, por ejemplo, a solicitar la dádiva, la figura de la persona interpuesta o los terceros favorecidos. En este caso, sólo se procederá a exponer estas dos últimas.

1. La persona interpuesta.

La conducta típica puede ser realizada tanto por los sujetos enunciados en la norma como por un tercero o “persona interpuesta”. A esta persona se le habrá encomendado, por alguno de los sujetos mencionados en el precepto, que realice la acción de sobornar o ser sobornado. Es decir, se tratará de un intermediario sin el cual no podría realizarse la conducta típica, aunque tendrá una calificación u otra dependiendo de si se trata de una modalidad pasiva o activa de corrupción.

En la modalidad pasiva, esta persona interpuesta será un sujeto el cual no tendrá las cualidades exigidas por el tipo, pero que actúa como intermediario por el sujeto que sí cumple estas cualidades (directivo, colaborador, deportista, etc.), para aceptar, recibir o solicitar el beneficio o ventaja no justificado, convirtiéndose así en partícipe del delito, pues se trataría de un cooperador necesario¹⁵⁶, sin el cual no se puede llevar a cabo la acción delictiva.

¹⁵⁴ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, p. 161.

¹⁵⁵ ENCINAL DEL POZO, Delito de corrupción privada, 2016, p. 391.

¹⁵⁶ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, p. 108. Nótese que la referencia expresa a la “persona interpuesta” permite en definitiva solucionar los problemas que plantean los delitos especiales propios respecto de aquellos casos en que se utiliza a un *extraneus* por un *intraneus*.

En la modalidad activa, al tratarse de un delito común, el intermediario tendrá el carácter de coautor del delito, pues por sí mismo también podría haber realizado la conducta típica¹⁵⁷.

Por último, cabe mencionar que este sujeto intermediario, en ocasiones, puede estar exento de responsabilidad penal, por exclusión de su culpabilidad o por alguna causa de justificación, en cuyo caso se estaría ante un supuesto de autoría mediata¹⁵⁸.

2. Los terceros favorecidos.

A estos terceros favorecidos se refiere la norma cuando establece que el beneficio o ventaja no justificado será “para sí o para un tercero”, ya sea en la modalidad activa o pasiva de corrupción. Por tanto, habrá de entenderse a este tercero como la persona que va a recibir ese beneficio o ventaja, sin haber realizado ningún acto de la conducta típica, es decir, se trata del beneficiario de la acción delictiva. Por lo tanto, en muchos casos tendrá una participación a título lucrativo en el delito (figura propia de la responsabilidad civil); sin embargo, si coopera con el corruptor o corrompido, o ha sido este tercero el que ha inducido para que se cometa tal conducta, responderá como partícipe del delito de corrupción deportiva (inductor, cooperador necesario o cómplice, según los casos)¹⁵⁹.

C. CONCURSOS DE DELITOS.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que en el delito de corrupción en el deporte resulta complicado establecer una relación concursal con otros delitos, debido a que este tipo penal es muy específico y singular, además de la condición de particulares que tienen sus sujetos activos¹⁶⁰.

Antes de establecer las posibles relaciones concursales de este delito, es preciso realizar algunas anotaciones al respecto. Por un lado, si un sujeto corrupto realiza varias acciones alternativas, ya sea en la modalidad activa o pasiva, con la intención de predeterminar o alterar el resultado de un evento deportivo, la unidad de acción típica no se verá sobrepasada, es decir, todas estas acciones se enmarcarían dentro de la misma

¹⁵⁷ ENCINAR DEL POZO, Delito de corrupción privada, 2016, p. 392.

¹⁵⁸ GILI PASCUAL, Corrupción en el sector privado, 2017, pp. 261-262.

¹⁵⁹ ENCINAR DEL POZO, Delito de corrupción privada, 2016, pp. 392-393.

¹⁶⁰ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, p. 184.

conducta penal, por lo que nos encontraríamos en un delito del tipo mixto alternativo¹⁶¹. Por otro lado, tampoco se rebasaría el marco de esta acción típica cuando la promesa, oferta u ofrecimiento en la corrupción activa se realicen a varios sujetos que puedan alterar el resultado de un encuentro o prueba deportiva, así como tampoco lo haría cuando los beneficios o ventajas injustificados sean múltiples. Todas estas acciones, se sancionarían como un único delito de corrupción en el deporte¹⁶².

Teniendo en cuenta todo ello, la probabilidad de establecer una conexión entre este delito específico con otros delitos es muy complicado. A pesar de ello, se puede apreciar alguna relación concursal con este delito, entre las que cabe destacar la relación con el delito de dopaje, la cual se examinará a continuación, junto con otros posibles concursos de delitos.

1. El delito de dopaje en relación con la corrupción con el deporte.

El delito de dopaje se enmarca dentro de los delitos contra la salud pública, más concretamente en el artículo 362quinquies CP, a cuyo tenor: *“Los que, sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas federados no competitivos, deportistas no federados que practiquen el deporte por recreo, o deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, de dos a cinco años”*.

La conexión entre ambos delitos se encuentra en la finalidad por la que se realiza la conducta típica, esto es, para modificar o alterar los resultados de las competiciones deportivas (aunque cabe aclarar que en el delito de dopaje también cabe finalidad de aumentar las capacidades físicas). Por tanto, existirá una relación concursal entre ambos delitos cuando el sujeto corruptor prometa, ofrezca o conceda un soborno por el cual el otro sujeto deberá utilizar sustancias dopantes que pongan en peligro su salud, con la

¹⁶¹ LUZÓN PEÑA, Lecciones, 3ª ed., 2016, 12/41.

¹⁶² ANARTE BORRALLA/ROMERO SÁNCHEZ, RECPC, 14-20, 2012, pp. 37-38.

intención de modificar el resultado de un evento deportivo. La relación concursal también se puede dar en la modalidad pasiva, esto es, cuando el sujeto acepta, solicita o recibe el soborno, con la condición de tomar tales sustancias para intentar que se produzca la adulteración del resultado¹⁶³.

En este supuesto, se estaría ante un concurso ideal de delitos, en el sentido de que una sola conducta típica constituye la infracción de dos tipos penales, por lo que se debería castigar tal acción con la mitad superior de la pena prevista para la infracción más grave, como se establece en el artículo 77. 1 y 2 CP¹⁶⁴.

2. Otros posibles concursos de delitos.

Entre otros posibles concursos de delitos con el de la corrupción en el deporte, se podría mencionar el delito de lesiones, el de falsedad documental y el delito de estafa.

La relación concursal con el delito de lesiones, art. 147 CP¹⁶⁵, sería uno de los más verosímiles que se puede dar en este ámbito. Pues se puede dar el supuesto en que uno de los empleados de la entidad deportiva, como puede ser por ejemplo un médico, le provoca un menoscabo físico intencionado a uno de los deportistas para que este no participe en el encuentro deportivo, y cuya acción ha sido realizada como consecuencia de un soborno¹⁶⁶. Esto significa que existirá un concurso real de delitos.

De similar forma se podría dar una conexión entre el delito de corrupción en el deporte con el delito de falsedad documental. Sería el caso en que el médico facultativo de la entidad deportiva, tras un soborno, certifica que el deportista sufre una lesión, estando éste en plena forma, para que el mismo no participe en el encuentro, prueba o

¹⁶³ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, pp. 187-188.

¹⁶⁴ Artículo 77. 1 y 2 CP: “1. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro.

2. En el primer caso, se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado.”

¹⁶⁵ Artículo 147 CP: “El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico”.

¹⁶⁶ CORTÉS BECHIARELLI, Corrupción deportiva, 2012, pp. 185-186.

competición deportiva¹⁶⁷. Por tanto, en este supuesto también se estaría ante un concurso real de delitos.

Por último, también puede surgir una relación concursal con el delito de estafa, sobre todo cuando esté conectado con las apuestas deportivas. Este sería el supuesto en que una persona soborna a uno de los sujetos mencionados en la corrupción deportiva, con el fin de que se adultere la competición deportiva y, por ende, también se adulteren las apuestas deportivas. Además, como afirma SÁNCHEZ BERNAL¹⁶⁸, sería necesario para apreciar el delito de estafa en tal conducta, que la misma se materializara en un perjuicio patrimonial para terceros. En definitiva, si se da tal supuesto se estaría en un concurso medial entre ambos delitos¹⁶⁹.

¹⁶⁷ *Ibid.*, p. 186.

¹⁶⁸ SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, p. 184.

¹⁶⁹ Para una mayor profundidad de la relación concursal entre el delito de corrupción en el deporte y el delito de estafa, véase: SÁNCHEZ BERNAL, Delito de corrupción deportiva, 2018, pp. 183-186.

VII. CONCLUSIONES.

El presente trabajo ha tenido por objeto el estudio del delito de corrupción en el ámbito del deporte. En el desarrollo de este estudio de los diferentes aspectos a tener en cuenta de la corrupción deportiva, son varias cuestiones las que se han ido planteando, sobre todo por la complejidad y la dificultad que conlleva la intervención del Derecho penal en un sector como el deportivo. De todo ello podemos concluir lo siguiente:

- La intervención penal en el ámbito del deporte es uno de los puntos más controvertidos desde la entrada en vigor del delito de corrupción deportiva en el año 2010, pues gran parte de la doctrina opina que tal intervención es innecesaria y que no se respeta el principio de intervención mínima del Derecho penal. Pero si tenemos en cuenta la gran relevancia que tiene este sector en la sociedad, y que tales acciones pueden afectar a grandes grupos de personas, podemos pensar que la intervención penal es muy necesaria como medio de protección; es decir, con el Derecho penal se está ante una herramienta de persuasión mucho mayor que la que se pueda dar en otra jurisdicción, cuyos medios de castigo o sanción no serían comparables. Por tanto, para evitar que se den tales supuestos es preciso que intervenga la jurisdicción penal, pues en el caso de no hacerlo, los casos de adulteración de las competiciones deportivas irán creciendo día tras días, y más teniendo en consideración el aumento de la relevancia social y sobre todo económica que se viene produciendo en este sector, donde se realizan movimientos económicos superiores a cientos de millones.

Todo ello, en mi opinión, hace más que necesaria la intervención penal en esta materia, pues de no tomar medidas estrictas y contundentes contra estos casos la situación se volvería insostenible, dándose cada vez más supuestos de este tipo y, por ende, haciendo que el deporte perdiera gran parte de la importancia que tiene, lo que acabaría perjudicando gravemente a todos los profesionales que se dedican a este sector.

- Antes de comenzar con el análisis de este tipo delictivo se podía pensar que el bien jurídico protegido sería el juego limpio o *“fair play”*, pero después del estudio de este tipo penal se observa que se está ante un delito socioeconómico. Esto es, se protege no sólo la pureza de las competiciones deportivas, sino también su trascendencia a nivel social y económico. Ello, en relación con el punto

anterior, reafirma la necesidad de la intervención penal en este ámbito. Y es que con esta norma se está protegiendo también el mencionado mercado deportivo, en el cual se ven involucrados numerosas personas, no sólo los deportistas, directivos o aficionados, sino también otros numerosos profesionales, ya sean las empresas de las cadenas de televisión o de ropa deportiva, reporteros y redactores que dedican su profesión sólo a este sector, siendo muchos más los que se encuentran en la misma situación.

- Otros de los puntos interesantes y debatidos en este delito versa sobre los sujetos activos, parte de los cuales vienen derivados del delito de corrupción privada, mientras que otros son específicos de este delito en particular: lo que llama especialmente la atención es que en la redacción de la norma no se ha incluido la figura del propietario de la entidad deportiva como posible sujeto activo. Algo que parece incongruente, pues si un directivo o administrador puede aceptar la dádiva y posee la capacidad para adulterar un partido, en mayor medida lo podrá hacer el propietario de la entidad deportiva. Por ello, en el presente trabajo se ha optado por incluirlo como posible sujeto activo análogamente a los directivos y administradores, como propuesta de *lege ferenda*. Todo ello, porque se debe entender que al igual que un directivo o administrador, el titular de la entidad deportiva puede realizar las mismas funciones y ser sujeto activo de un delito de este tipo. Sin embargo, aún queda mucho que desarrollar de este tipo penal, lo que hace pensar que, con el tiempo y la aplicación de este delito, el legislador acabará incluyendo tal figura como posible sujeto activo.
- En el marco procesal, a efectos probatorios, es donde más problemas van a surgir en la aplicación de este tipo. Por un lado, al tratarse de un delito de consumación anticipada, se entenderá consumado aunque no se haya realizado el intercambio de la dádiva, lo que dificultará mucho el trabajo en el momento de demostrar que se ha producido la conducta típica, pues lo más seguro es que no existan pruebas fehacientes de ello, ya que se habrá producido de palabra y lo más seguro es que no haya quedado constancia de ello. En definitiva, la aplicación del mismo va a revestir de gran complejidad y dificultad para demostrar que se ha producido la conducta típica y sobre todo para desvirtuar la presunción de inocencia del culpable.

Por otro lado, aunque el intercambio de la dádiva se haya producido, también habrá dificultades para demostrarlo, pues estos pueden producirse en efectivo sin quedar registro de tal movimiento. Ello si partimos de que la dádiva sea de naturaleza económica, pues aún se puede demostrar que se ha producido el intercambio si se encuentra el dinero. Pero en el supuesto de que el beneficio o ventaja sea de otra naturaleza, como por ejemplo un intercambio de favores, no habrá constancia de ello o será muy difícil de probar.

En definitiva, en lo relativo al marco probatorio de este tipo delictivo, se reafirma la primera conclusión expuesta: la intervención penal es más que necesaria en este ámbito, pero a día de hoy sirve en mayor medida como herramienta de persuasión y control que como herramienta punitiva, pues todavía faltan muchos matices por definir y desarrollar en este tipo delictivo. Todo ello, contando con la evolución que se irá produciendo con el paso del tiempo en la resolución de todos los debates y problemas de este tipo penal, convirtiéndose en la herramienta punitiva que se busca con la regulación de este delito.

- En último lugar, el poco tiempo desde la entrada en vigor de este delito de corrupción en el deporte, que incluso ha sufrido cambios tras la reforma del Código penal, ha dificultado su aplicación por parte de los Tribunales. Los pocos casos sonados que ha habido en esta materia están aún en pleno procedimiento o han sido ya sobrepasados, por lo que todavía hay escasos pronunciamientos por parte de los Tribunales españoles sobre los elementos típicos, aunque todo hace pensar que con el tiempo estos empezarán a emitirse, aclarando algunos de los debates que giran en torno a este delito y que han sido expuestos en el presente trabajo.

VIII. BIBLIOGRAFÍA¹⁷⁰.

- Aguilar Romo, Mónica, El delito de amaño de partidos en España tras la reforma de la LO 1/2015. Una reflexión sobre la conducta típica, RADPP, 54, 2019, pp. 1-20.
- Anarte Borralló, Enrique/Romero Sánchez, Cándido, El delito de corrupción deportiva, aspectos metodológicos, dogmáticos y políticos-criminales, RECPC, 14-20, 2012, pp. 1-24.
- Benítez Ortúzar, Ignacio Francisco, El **Delito de “Fraudes deportivos”**: Aspectos criminológicos, político-criminales y dogmáticos del artículo 286bis.4 del Código Penal, Dykinson, Madrid, 2011.
- Caruso Fontán, María Viviana, El concepto de corrupción. Su evolución hacia un nuevo delito de fraude en el deporte como forma de corrupción en el sector privado, RFNE, 9, 2009, pp. 145-172.
- Cortés Bechiarelli, Emilio, El Delito de **Corrupción deportiva**, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.
- Luzón Peña, Diego-Manuel, **Lecciones** de Derecho Penal, parte general, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.
- Encinar del Pozo, Miguel-Ángel, El **Delito de Corrupción Privada** en el ámbito de los Negocios, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016.
- Eser, Albin, Deporte y Justicia Penal, RP, 6, 2000, pp. 53-66.
- Gili Pascual, Antoni, El Delito de **Corrupción en el Sector Privado**, Marcial Pons, Madrid, 2017.
- Gili Pascual, Antoni, La tipificación penal del fraude en competiciones deportivas. Problemas técnicos y aplicativos, RDPC, 3ª Época, 8, 2012, pp. 13-70.

¹⁷⁰ En negrita, las expresiones con que las monografías y obras colectivas han sido citadas en las notas al pie.

- *Ibars Velasco, Daniel*, Corrupción en el deporte, en Quintero Olivares, Gonzalo (Dir.), **Comentario** a la reforma penal de 2015, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, pp. 577-584.
- *Martínez-Buján Pérez, Carlos*, **Derecho penal económico** y de la empresa. Parte especial, 5ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
- *Morillas Cueva, Lorenzo*, Respuestas jurídicas al **Fraude en el deporte**, Dykinson, Madrid, 2017.
- *Mir Puig, Santiago*, **Derecho Penal**. Parte general, 10ª ed., Reppertor, Barcelona, 2015.
- *Pérez Ferrer, Fátima*, Principales novedades en los delitos de fraude deportivo tras la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo, en Morillas Cueva, Lorenzo (Dir.), **Respuestas jurídicas** al fraude en el deporte, Dykinson, Madrid, 2017.
- *Sánchez Bernal, Javier*, El **Delito de Corrupción Deportiva** tras la Reforma de 2015, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018.

IX. LEGISLACIÓN

- Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado. Diario Oficial de la Unión Europea «DOUE» núm. 192, de 31 de julio de 2003. Referencia: DOUE-L-2003-81169.
- Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas. (¿ESTA EN VIGOR?)
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Jefatura del Estado «BOE» núm. 281, de 24 de noviembre de 1995. Referencia: BOE-A-1995-25444.
- Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Jefatura del Estado «BOE» núm. 152, de 23 de junio de 2010. Referencia: BOE-A-2010-9953.
- Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Jefatura del Estado «BOE» núm. 77, de 31 de marzo de 2015. Referencia: BOE-A-2015-3439.
- Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Jefatura del Estado «BOE» núm. 249, de 17 de octubre de 1990. Referencia: BOE-A-1990-25037.
- Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas. Jefatura del Estado «BOE» núm. 312, de 30 de diciembre de 1991. Referencia: BOE-A-1991-30862.

